

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**



**"Fundamentos de política criminal del artículo 122-b del
código penal y finalidad de la pena impuesta por
juzgados penales de Chiclayo en el año 2019"**

TESIS

**Presentada para optar el Grado Académico de Doctora en
Derecho y Ciencia Política**

AUTORA:

Mg. Clara Denisse, Torres Campos

ASESOR:

Dr. Freddy Widmar, Hernández Rengifo

LAMBAYEQUE - PERU

2024



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA



Fundamentos de política criminal del artículo 122-b del código penal y finalidad de la pena impuesta por juzgados penales de Chiclayo en el año 2019

Mg. Clara Denisse Torres Campos
Autora

Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo
Asesor

Proyecto de Tesis presentado a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA

Aprobado por:

Dr. Luis Armando Hoyos Vásquez
Presidente del jurado

Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero
Secretario del jurado

Dr. Walther Jaime Ramos Manay
Vocal del jurado

Fecha de Sustentación: 12 de febrero de 2024

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación se lo dedico a mis padres por su Amor, Apoyo incondicional y todo el esfuerzo que han demostrado a través de todos estos años a lado mío sin los cuales no fuera la Mujer, Madre y Profesional que soy los amo, también dedico esta tesis a mi Hijo Víctor Kerem Eugenio que es lo más bonito y puro que Dios me regalo estoy muy orgullosa de ser tu madre y nos espera un viaje hermoso que recorrer hijo mío.

INDICE GENERAL

ACTA DE SUSTENTACIÓN (COPIA)	3
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD	4
INDICE GENERAL	6
RESUMEN	9
ABSTRACT	10
INTRODUCCIÓN	11
I.	DISEÑO TEÓRICO 16
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	16
1.2.	BASE TEÓRICA 17
1.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES	24
1.4.	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 25
1.5. HIPÓTESIS	26
2.1.	TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 27
2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	27
2.3.	POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 29
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE RECOLECCIÓN DE DATOS	31
CAPITULO III RESULTADOS	32
3.1. Sentencias	32
3.1.1. Exp. N° 00258-2021-13-1706-JR-PE-08	32
3.1.2. Exp. N° 00279-2021-91-1706-JR-PE-05	34
Exp. N° 00279-2021-91-1706-JR-PE-05	34
3.1.3. Exp. N° 00559-2018-20-1706-JR-PE-06	36
00559-2018-20-1706-JR-PE-06	37
3.1.4. EXP. N° 2208-2021-26-1706-JR-PE-03	39
3.1.5. Exp. N° 02445-2019-7-1706-JR-PE-08	42
Exp. N° 02445-2019-7-1706-JR-PE-08	42
3.1.6. Exp. N° 03759-2020-22-1706-JR-PE-08	45
3.1.7. Exp. N° 3958-2019	48
3.1.8. Exp. N° 04199-2018-79-1706-JR-PE-08	49
04199-2018-79-1706-JR-PE-08	50
3.1.9. Exp. N° 04823-2019-54-1706-JR-PE-02	52

3.1.10. Exp. N° 6089-2019-84-1706-JR-PE-06	53
6089-2019-84-1706-JR-PE-06	54
3.1.11. Exp. N° 06175-2021	56
06175-2021	56
3.1.12. Exp. N° 06465-2021-30-1706-JR-PE-06	60
06465-2021-30-1706-JR-PE-06	60
3.1.13. Exp. N° 06535-2019-42-1706-JR-PE-08	66
06535-2019-42-1706-JR-PE-08	66
3.1.14. Exp. N° 6784-2020	68
6784-2020	68
3.1.15. Exp. N° 06795-2020	70
06795-2020	70
3.1.16. Exp. N° 7417-2020-57-1706-JR-PE-07	73
3.1.17. Exp. N° 07900-2018-66-1706-JR-PE-05	77
3.1.18. Exp. N° 8416-2019-71-1706-JR-PE-02.	79
8416-2019-71-1706-JR-PE-02.	79
3.1.19. Exp. N° 9159-2018	81
9159-2018	81
3.1.20. Exp. N° 10408-2018	83
3.1.21. Exp. N° 10840-2017-52-1706-JR-PE-06	85
10840-2017-52-1706-JR-PE-06	85
3.1.22. Exp. N° : 11408-2018-22-1706-JR-PE-08	94
3.1.23. Exp. N° : 11419-2019-50-1706-JR-PE-01	96
11419-2019-50-1706-JR-PE-01	96
3.1.24. Exp. N° : 02627-2019-28-1706-JR-PE-06	98
02627-2019-28-1706-JR-PE-06	98
3.1.25. Exp. N° : 2767-2021-67-1706-JR-PE-05	101
3.1.26. Exp. N° : : 04542-2019-86-1706-JR-PE-01	103
3.1.27. Exp. N° : 08031-2018-51-1706-JR-PE-01	104
08031-2018-51-1706-JR-PE-01	104
3.1.28. Exp. N° : 08064-2018-14-1706-JR-PE-01	106
08064-2018-14-1706-JR-PE-01	107
3.1.29. Exp. N° : 8703-2019-74-1706-JR-PE-01	109
8703-2019-74-1706-JR-PE-01	109
3.1.30. Exp. N° : 11317-2019-86-1706-JR-PE-07	111
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN	115

CONCLUSIONES	122
RECOMENDACIONES	125
Referencias bibliográficas:	127

RESUMEN

El presente trabajo tiene objetivo determinar si existe relación entre los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal y la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de casos de los años 2019-2021 en los juzgados penales de Chiclayo, para lo cual se aplicaron los métodos descriptivo, explicativo, analítico, sintético, inductivo y deductivo, así mismo se analizaron treinta sentencias condenatorias por el delito en comento entre los años 2019 a 2021, siendo que del contraste de los antecedentes, bases teóricas y análisis de los casos se arribó a la conclusión que La relación entre los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal y la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de los casos de los años 2019-2021 en los juzgados penales de Chiclayo analizados en el presente trabajo implica que si dichos fundamentos tienen en cuenta la dignidad del condenado, la víctima y la convivencia social, entonces se cumple la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional.

PALABRAS CLAVE:

Violencia, mujer, integrantes del grupo familiar, política criminal, sanción penal.

ABSTRACT

The objective of this work is to determine if there is a relationship between the criminal policy foundations noted in article 122-B of the Penal Code and the purpose of the punitive sanction imposed by the court, based on the analysis of cases from the years 2019-2021. in the criminal courts of Chiclayo, for which the descriptive, explanatory, analytical, synthetic, inductive and deductive methods were applied, likewise thirty convictions for the crime in question between the years 2019 to 2021 were analyzed, being that from the contrast of the antecedents, theoretical bases and analysis of the cases, it was concluded that the relationship between the foundations of criminal policy noted in article 122-B of the Penal Code and the purpose of the punitive sanction imposed by the court, from the Analysis of the cases of the years 2019-2021 in the criminal courts of Chiclayo analyzed in the present work implies that if these foundations take into account the dignity of the convicted person, the victim and social coexistence, then the purpose of the punitive sanction is fulfilled. imposed by the court.

KEYWORDS:

Violence, women, members of the family group, criminal policy, penal sanction.

INTRODUCCIÓN

Sin duda que se aproximan tiempos convulsionados en el ámbito social y el ámbito económico en nuestro país. Las noticias escritas y las noticias televisadas reflejan una serie de hechos en los que se denota afectaciones directas a la vida, la integridad, la salud, la libertad sexual, la indemnidad sexual, como también el patrimonio, la seguridad, la salud pública, entre otros bienes tutelados.

Frente a esto, corresponde dar al Estado la respuesta a fin de combatir todos estos comportamientos antisociales que terminan afectando a los ciudadanos, además de crear una permanente situación de intranquilidad, desconfianza y temor, por lo que la reacción formal estatal debe ser coordinada, fundamentalmente entre los Poderes públicos y los organismos extrapoder.

A través del tiempo, el Estado, llámese Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, responde de diversas maneras antes los actos delincuenciales, pero es de conocimiento público que las respuestas que se dan son casi todas legales, con énfasis en los espacios punitivos, de tal manera que encontramos que se criminalizan nuevas conductas antisociales, se modifican normas a través del incremento de las penas asignadas originalmente, se prescriben penas máximas como la cadena perpetua, se establecen nuevas circunstancias agravantes del delito, se prohíben beneficios penitenciarios, entre otras maneras de reacciones que tiene el Estado para hacer frente a los comportamientos que se tornan crónicos y hasta permanentes.

En esto, corresponde el Poder Judicial hacer efectiva la respuesta del Estado a través de la aplicación de una sanción penal, la misma que si se corresponde al máximo

quantum establecido, es celebrada y aplaudida por los diferentes medios de información, las redes sociales, sin importar más que el quantum impuesto como sanción penal, y se cree que con la determinación de la pena se llega a conseguir justicia, y se olvida el cumplimiento de la pena, la resocialización del imputado así como menos se tiene en cuenta las motivaciones que llevaron a cometer un acto ilícito penal.

En este afán de concretar la aplicación de la pena privativa de la libertad, coinciden también los propósitos del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Nacional Penitenciario, quienes se encargan de promover la aplicación y el cumplimiento de la sanción penal, conducir el período de rehabilitación, como parte precisamente de la política criminal del Estado.

Sin embargo, pese a que las modificaciones de las normas penales se difunden, se resalta las nuevas agravantes y se dan a conocer los nuevos ilícitos penales, poco o nada contribuyen en la disminución o en la erradicación de los delitos que se quieren combatir, es más, pareciera incluso que la normatividad puesta en vigencia alentara la realización de los sucesos punitivos, pues, día a día se incrementan a pesar del esfuerzo que realizan los operadores del derecho, incluyendo también la acción que desarrolla la Policía Nacional del Perú.

Uno de estos casos lo constituye el delito establecido en el artículo 122-B del Código Penal vigente, referido a las Agresiones en la mujeres o integrantes del grupo familiar, que constituyen por cierto los primeros actos de violencia física o psicológica contra la mujer y los primeros atentados contra los miembros de la familia. En este delito incluso, por mandato expreso del artículo 57 del Código Penal corresponde en todos los casos penas privativas de la libertad con carácter de efectiva, sin que esto haya permitido disminuir los casos que se presentan cada día, y que lamentablemente incluso dentro de la Pandemia del Covid 19 se incrementaron.

Lo señalado líneas anteriores, incluso queda evidenciado con datos que son objetivos y precisos como es el hecho que en todos las Cortes Superiores de Justicia del país se ha creado la Sub especialidad de Juzgado de Familia para sancionar la Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar teniendo como finalidad importante la de atender inmediatamente con medidas de protección a las víctimas de los casos que se conozca.

Por esto, nos preguntamos si es que realmente un hecho social como lo es también todo delito, ¿no pueda ser combatido a través de las decisiones adoptadas por las personas encargadas de formular e implementar las políticas de lucha contra la criminalidad? ¿Somos realmente una sociedad que tiende a seguir la senda delictiva y a seguir creando tendencias de grupo hacia la comisión de hechos ilícitos? ¿Sirve de algo, criminalizar las conductas reprobables, aumentar las penas o modificar los supuestos delictivos?

Entonces, se considera que la respuesta dada por el Estado no resulta ser suficiente como solución integral para contrarrestar la acción delincuencia, entonces queda claro que hay problema con la política criminal que nace a partir de las decisiones del Estado, entendiendo por esto la interacción de una serie de funcionarios que deben procurar la rehabilitación del sentenciado privado de su libertad.

Como se conoce, toda política criminal debe ser entendida como el conjunto de acciones que realiza el Estado para luchar contra el delito, de tal manera que ha de depender mucho sobre la concepción del problema criminal lo que ha de permitir contrarrestar el conflicto que se origina, de tal manera que no sólo debe interactuar el derecho penal, sino todo el conjunto de las ciencias penales precisamente para abordar el

suceso criminológico y saber cómo es que se debe responder ante determinadas conductas punitivas.

Entendida, así las cosas, entonces la política criminal debe dar una respuesta al problema del delito, debiéndose establecer una concepción en la que predomina la actividad legislativa, otras referidas a la protección de la víctima, o la sanción penal y la rigurosidad del confinamiento carcelario, para otras concepciones referirse a la rehabilitación del condenado, entre otros aspectos que se pretende abordar en el presente trabajo.

Por esta razón, se pretende estudiar la política criminal del Estado y poder establecer sus principales lineamientos, que precisamente impliquen la lucha contra el hecho delictivo, de tal manera que frente a un acontecimiento criminal establecer cómo se concibe la pena impuesta, cómo se protege a la víctima, cómo es que se realiza la rehabilitación del interno, si es que se prepara a la sociedad para que permitan la reinserción dentro de la comunidad.

Frente a este propósito, se va a analizar sentencias condenatorias en los casos del delito establecido por el artículo 122-B del Código Penal vigente, precisamente porque es uno de los ilícitos que junto con el de omisión a la asistencia familiar devienen en ser los más frecuentes, y en el que se indica que la pena a imponer es una de carácter efectiva, por lo que siendo esto así queda claro no sólo el propósito de estudio como también la finalidad de la presente investigación.

Por ello el problema en el presente caso queda determinado de la siguiente forma:

¿Qué relación existe entre los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal y la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de casos de los años 2019-2021, en los juzgados penales de Chiclayo?

Como objetivo principal se planteó determinar si existe relación entre los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal y la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de casos de los años 2019-2021 en los juzgados penales de Chiclayo.

Como objetivos específicos se tienen los siguientes:

- Explicar los fundamentos que caracterizan la política criminal del Estado que sanciona las conductas criminales para el caso del artículo 122- B del Código Penal.
- Establecer los supuestos teóricos y normativos de las sanciones punitivas impuestas por el juez penal.
- Evaluar el contexto en el que se sancionó como ilícito el contenido del artículo 122- B del Código Penal.
- Analizar casos judiciales penales correspondientes a los años 2019-2021, para establecer relación entre política criminal y la aplicación de una sanción penal.

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación en la medida en la que aborda la siempre vigente interrogante si es que el derecho penal sirve realmente para una finalidad distinta a la de sancionar e imponer limitaciones a la libertad. Esto implica cuestionarse incluso el papel del Estado como un órgano represor de las conductas antisociales, sin que exista alguna otra meta que cumpla el derecho punitivo y que esté

referida por ejemplo a la prevención de los hechos delictivos, que debe ser en definitiva el mensaje que se pretende dar a la sociedad.

La aplicación de una sanción penal no debe ser un acto mecánico y de analogía para todos los casos, incluso tratándose del mismo delito y de la misma pena, más aún si al imponer privación de la libertad efectiva, se lleva consigo el mensaje de que la pena impuesta debe servir para prevención para que otras personas no cometan el mismo hecho delictivo.

Es importante la realización del presente trabajo por cuanto, es tiempo también que las instituciones penales cumplan con la finalidad para las cuales fueron diseñadas por los dogmáticos, pues, no resulta justo tener un Estado bombero en el que ante determinados conflictos penales utilice la manguera del derecho penal para tratar de contrarrestar el impacto que sufre la sociedad a través de los actos delictuales que se comenten dentro de la misma.

Es importante entonces que temas como el que se trata de abordar, sea de preocupación constante por la universidad, que debe convertirse en el motor de todo cambio social, más aún si su función es la de brindar propuestas para cambiar el estado de las cosas y tener una sociedad viable, con desarrollo y con iguales oportunidades para todos los ciudadanos.

CAPITULO I DISEÑO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Corcoy (2010) en su tesis de investigación analiza en “qué medida las reformas legislativas operadas en los últimos años, que tratan de solucionar el problema de la violencia de género y doméstica, han sido positivas o son criticables. Positiva es la sensibilización de la sociedad y, especialmente, de las instancias encargadas de perseguir y castigar estos hechos, así como de adoptar medidas de formación, tratamiento psicológico y ayuda económica, que inciden en el origen de esta lacra. Los problemas que se derivan de la actual regulación se suscitan en dos sentidos opuestos: excesos y déficit punitivos. Los excesos provienen esencialmente de acusaciones falsas, imposición indiscriminada de medidas de alejamiento y prisión preventiva y desproporción entre la pena prevista e impuesta y el desvalor del hecho. El déficit se origina a partir de las calificaciones "benevolentes" de hechos que constituyen delitos de homicidio, lesiones o violaciones, aun cuando sea en grado de tentativa, como delitos de "violencia de género o doméstica".

1.2. BASE TEÓRICA

1.2.1. Política Criminal:

Sostiene Silva (2000) que

“La política criminal como disciplina científica fue ideada por Frans Von Litz, concibiéndola como un conjunto de criterios determinantes de una lucha eficaz contra el delito. Su punto de partida, era una concepción determinista del hombre, una visión del delito como reflejo de la peligrosidad del mismo (social e

individualmente determinada) y una fe positivista en la posibilidad de corregir los factores individuales (por la psiquiatría o la instrucción) y las estructuras sociales (por la política social) que conducen al delito”. (p.188).

Por otro lado, Villavicencio sostiene que “se trata de una técnica con base en la experiencia que integra la política jurídica del Estado, y que forma parte de la política general del mismo. Por tanto, puede considerarse como una entidad de naturaleza fáctica y normativa” (Villavicencio, 2010, p. 27)

Para Jescheck (1987), la política criminal se ocupa de

“Cómo deba conformarse el derecho penal para cumplir mejor su misión de proteger a la sociedad. La política criminal conecta con las causas del delito, se ocupa de cómo hayan de recogerse en forma adecuada los componentes de los injustos típicos para lograr brindar una respuesta en la realidad, trata de establecer los efectos de las sanciones utilizadas por el derecho punitivo para no limitar el ámbito de libertad del poblador por encima de lo demasiado necesario, evaluando si el derecho penal material se está listo para ser realizado en el proceso penal”(p. 18)

1.2.2. Fundamento de Política Criminal en delitos relativos a violencia familiar

Nuestro país tiene una marcada y ancestral cultura patriarcal, construida históricamente y que ha coadyuvado a establecer “el ideal masculino como especie dominante, a arribar a la postura que existe una relación de subordinación e inferioridad de la mujer hacia el varón” (Castillo, 2019, p. 71). Así también Del Águila (2019) sostiene que analizando el contexto histórico de nuestro país, se advierte que los actos de violencia han venido ocurriendo desde muchos años atrás y viene afectando gravemente a nuestra sociedad.(p. 17)

Así Castillo (2019) refiere que:

Es indispensable la reacción del ius puniendo del Estado contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar hacia los integrantes de la misma, al existir una situación de discriminación, vulnerabilidad frente al sometimiento y uno de los mecanismos necesarios es la tipificación como delito de estos fenómenos, en la línea de acción para prevenir su comisión, siendo que esta acción de política criminal se legitima para proteger un tipo de violencia que afectan a las mujeres por su condición de tal y a ciertos integrantes del grupo familiar por su situación de vulnerabilidad.

1.2.3. Violencia – Definición:

La violencia puede definirse como el rompimiento de un orden estructurado, de una concordia establecida, de unas condiciones de vida, en la que se cifran las posibilidades de existencia de la vida humana. (Huaroma, 2018)

Ayvar (2007) señala que:

“La violencia consiste en la utilización de todo medio físico o lógico, por parte de un individuo o grupo contra otro u otros, orientado a inspirar temor, miedo, intimidación o terror, o causar daño intencional o deliberadamente o el anuncio de una mal o amenaza”.

En cuanto a las características, Reátegui R. (2019) advierte las siguientes:

“-Recurrente: ejercicio de actos agresivos hacia las mujeres son reiterativos.

-Deliberado: implica poseer entendimiento en cuanto a su conducta, por ello es responsable de la misma.

-Poder o dominación: La violencia sirve para doblegar la voluntad de la víctima.

-Predisposición a aumentar: Los hechos que surge cada vez se intensifican y se tornan habituales, menoscabando a las personas que lo sufren.”(p.203)

1.2.4. Violencia Familiar

Refiere Reátegui (2017) que:

“El derecho a la vida es para todas las personas como sujetos de derecho, se erige en la condición sin la cual ni sería posible la confluencia de otros derechos, por ello la protección de la dignidad humana al ser el fin supremo de la sociedad”.

Actualmente se denomina violencia a contra el grupo familiar, en ese sentido el grupo familiar está conformado por los esposos, ex esposos, concubinos, ex concubinos, padrastros, madrastras, ascendientes, parientes colaterales del cónyuge. (Castillo, 2019, p. 44)

Al respecto debe tenerse consideración respecto a integrantes vulnerables del grupo familiar, conformada por niños, mujeres y ancianos y personas con alguna discapacidad, al ser ellos quienes deben gozar de mayor protección, lo que implica que su condición de vulnerabilidad se procede por causas distintas al género como es la edad, la madurez física o mental, etc.

1.2.5. Enfoque de Género:

Es una estrategia adoptada por los Estados y los Organismos Internacionales, que como refiere Huaroma (2018) busca analizar la realidad en forma relacional, que nos permita:

“Identificar y explicar cómo las diferencias sexuales entre mujeres y hombres, dentro de una sociedad patriarcal, fue transformándose en desigualdades sociales que generaron abuso y relaciones inequitativas de poder. De este modo, se puede analizar la etiología de la discriminación, exclusión, desprecio y subordinación de las mujeres, y por otro lado de comprender cómo el patriarcado impuso roles de dominación y violencia en manos de los hombres.”

1.26. Violencia de Género:

Para empezar por definir este concepto, es necesario diferenciar entre sexo y género.

El sexo viene a ser “la interpretación social y cultural del conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que diferencian a las personas en mujeres y varones” (Ragúz, 2015, p. 3)

Mientras que género implica el conjunto de caracteres que “social y culturalmente se le atribuyen a las mujeres, varones y actualmente a las personas en general” (Ruiz, 2008)

(Olsen, 1990) señala que debido al género es que se refiere que:

“Por ejemplo se señala que el hecho de que las mujeres sean usualmente asociadas a la delicadeza, la sensibilidad, la corporalidad, la cosificación sexual o la maternidad y los varones a la fortaleza, la rudeza, la racionalidad, la vehemencia sexual o la autonomía, no se debe a su condición sexual natural, sino que se debe esencialmente a su género, es decir, como son educados o socializados desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida”

Por otro lado existen los llamados estereotipos de género que en el contexto de violencia de generan, explican esta violencia, ya que mediante estos estereotipos es que se impone a las mujeres determinados comportamientos, actitudes y atributos que permiten su subordinación por parte de los varones, esta sería la razón por la cual las mujeres son las que sufren las distintas formas de violencia ante el

quebrantamiento de alguno de los estereotipos de género impuestos por la sociedad (Díaz, Rodríguez, & Valega, 2019, P. 23)

El concepto “Violencia de Género” es de reciente data y actualmente es reconocido como una categoría de violencia, la misma que ha ido evolucionando generacionalmente a la par con la libertad de protesta de las mujeres, ante la violencia física y psicológica sufrida por sus congéneres. Así, este término se difundió y universalizó a partir de la “IV Conferencia mundial sobre la mujer, celebrado bajo lo auspicios de la organización de las Naciones Unidas, a mediados de la década de los 90 en la ciudad de Pekin” (Monereo & Triguero, 2009)

Según Echeburúa & Redondo (2010)

“Violencia de género constituye el conjunto de expresiones agresivas, emociones, conductas, ideas, modos de pensar, tradiciones, creencias, frases, hábitos, culturas, gestos, estructuras sociales, etiquetas, normas y regímenes políticos nocivos que de manera histórica y ancestral han sufrido las mujeres a causa de la construcción social del género femenino y masculino, lo que originó la división y asignación de funciones que cada uno debía desempeñar en la sociedad. En otras palabras, violencia de género se refiere a las manifestaciones y conductas nefastas contra la mujer y todo lo femenino como construcción social por parte de los hombres y lo masculino como construcción social”.

Respecto a la víctima s de la violencia de género, éstas son elegidas justamente por su género, siendo el anuncio de dominio que se busca internalizar en la víctima: *confórmate con tu lugar*” (Carcedo & Sagot, 2000)

Para Toledo (2009) es

“La agresión física o psicológica basada en o por razones de género no solo corresponde a la ejercida hacia las mujeres, sino también a la ejercida hacia los hombres y todos aquellos quienes poseen orientaciones o identidades de género distintas a las dominantes, vale decir, lesbianas, gays, personas bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), por lo tanto, la violencia de género incluye la violencia contra las mujeres, pero también implica una noción más amplia teóricamente

1.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

- **Violencia:** Utilización y manejo de la fuerza o amenaza para obtener una finalidad, específicamente para someter, dominar y avasallar a alguien o imponer algo contra su voluntad.
- **Sexo:** Se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer, por ejemplo, menstruación en las mujeres, voz grave en los varones, etc.

- **Género:** Se refiere a las particularidades y oportunidades sociales y culturales relativas a varón hombre o mujer, las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estas particularidades, oportunidades y relaciones, se establecen y se aprenden en la sociedad, son específicos al contexto o tiempo, y pueden cambiar, vale decir, el hecho que las mujeres hagan más tareas del hogar que los hombres.
- **Estereotipo:** Es un conjunto de dogmas, creencias, compartidas respecto los caracteres o comportamiento que deben ostentar las personas en un contexto determinado, pudiéndose denominar como prejuicio.
- **Grupo familiar:** Conformado por personas que conforman un hogar y que no se limitan a vínculo consanguíneos, sino también de afinidad y otros (familias ensambladas), mientras ni medien vínculos laborales o contractuales

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables	Definición de la Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Variable Independiente: fundamentos de la política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal	Debe ser entendida como el conjunto de respuestas que da el Estado a conflictos sociales que califica como delitos.	Teórico Derecho penal general Derecho penal especial	Respeto a la dignidad Resarcimiento del daño Sistema de prevención Política de resocialización	Análisis de datos Fichaje

			Sensibilización social	
Variable Dependiente: Finalidad de la sanción punitiva	Debe ser entendida como el objetivo que persigue la sanción penal expresada en una sentencia condenatoria	Teórico-práctico: Derecho penal general Derecho penal especial	La pena privativa de libertad Sustitución de la pena Condicionabilidad de la pena	Análisis de datos Fichaje Análisis de sentencias

1.5. HIPÓTESIS

“Si los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal tienen en cuenta la dignidad del condenado, la víctima y la convivencia social, entonces se cumple la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de casos del año 2019, juzgados penales de Chiclayo”

CAPITULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

2.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La investigación que pretendemos realizar versa sobre uno de los problemas más sensibles que se presentan en el ámbito de la administración de justicia penal: acerca del sentido de la política criminal que asume al Estado para perseguir el delito, y específicamente en los casos en los que la afectación al bien jurídico parece ser mínima como es el caso del ilícito previsto en el artículo 122-B del Código Penal vigente, en el que se impone la máxima sanción como es la privación de la libertad pero de manera efectiva. Por esta razón bajo la combinación de variables conceptuales como implica establecer una decisión normativa penal se busca establecer el sentido de la política criminal del Estado a través del derecho penal. Esto motiva desarrollar esta investigación a partir de casos judicializados, siendo el tipo de investigación la de **Tipo Descriptivo - Explicativo**.

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2.2.1. Método descriptivo.-

Se utilizará para describir la información recogida, según los criterios de evaluación establecidos en la fundamentación de las variables dependiente, que es objeto de estudio.

2.2.2. Método explicativo.-

Este método ha de permitir responder a la pregunta ¿cuáles son los fundamentos de política criminal que se advierte en el artículo 122-B del Código Penal vigente?, razón por la que se tratará de explicar cómo se expresa

a través de la sanción penal, lo que implica plantear hipótesis explicativa y un diseño descriptivo.

2.2.3. Método inductivo.-

Ha de permitir analizar cada caso expresado en la sentencia condenatoria, analizando cada fundamento que sustentan la imposición de una condena privativa de la libertad efectiva.

2.2.4. Método deductivo.-

Que ha de permitir establecer si los criterios que fundamentan las sentencias condenatorias se encuentran fundamentados en criterios precisos, prácticos sin que predomine el fundamento teórico, con énfasis en el argumento judicial de la sanción penal.

2.2.5. Método analítico.-

Se aplicará a los sentenciados por diversos delitos, analizando la relación que debería existir entre la determinación del sentido de la política criminal que se tiene en cuenta al criminalizar conductas y de qué manera esto se expresa en la sanción penal.

2.2.6. Método Sintético.

Este método significa composición, reunión, agrupación, se ha de aplicar en la investigación unificando los datos recogidos que se expresarán en un todo armónico, los datos aislados tienen un significado particular. La síntesis debe llevar a conocer el significado de los mismos al relacionarlos entre sí.

2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

2.3.1. Población.

La población está formada por el total de sentencias condenatorias emitidas por los juzgados penales de Chiclayo sobre el delito establecido por el artículo 122 – B del Código Penal vigente, entre los años 2019 – 2021, a fin de evaluar los criterios de determinación de la pena.

2.3.2. Muestra

Correspondiente a 30 casos extraídos de la población, como se aprecia a continuación:

TABLA N° 01:

Muestra a la que se va aplicar la ficha de análisis de documentos

Aspectos Casos	Frecuencia	Porcentaje
Sentencias condenatorias con penas efectivas, año 2019	10	33.33
	10	33.33

Sentencias condenatorias con penas efectivas, año 2020		
Sentencias condenatorias con penas efectivas, año 2021	10	33.33
Total	30	100

Año: 2022

Fuente: De investigación

2.3.3. Muestreo

Por la naturaleza de la investigación, nuestra unidad de análisis, que comprende 30 sentencias penales, que aborda nuestra problemática y objeto de estudio, ha sido seleccionado a través de la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia, delimitadas en un espacio de tiempo que oscila del año 201 al 2020, las cuales serán analizadas e interpretadas.

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.4.1. Fichaje

Mediante esta técnica se recogerá los datos teóricos, de opinión y de comentario de los textos nacionales y extranjeros que existan sobre el tema materia de análisis y comentario.

Su Instrumento serán las fichas bibliográficas, textuales y de comentarios, fichas linkográficas, etc.

2.4.2. Análisis Documental

Estata técnica se ha de emplear para cotejar la información teórica con el contenido de los datos obtenidos en las sentencias condenatorias analizadas.

El instrumento se expresará mediante una ficha de cotejo, el mismo que será manejado por la investigadora.

CAPITULO III RESULTADOS

3.1.1. Exp. N° 00258-2021-13-1706-JR-PE-08

Fecha:	20 DE JULIO DE 2022
N° Exp:	00258-2021-13-1706-JR-PE-08
Órgano Jurisdiccio nal:	Sexto Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>La agraviada Zaida Jackeline Negrete Llontop, ha tenido una relación de convivencia de 06 años aproximadamente, con el acusado Marco Antonio Farroñay Díaz, encontrándose separados hace 10 años, habiendo procreado 04 hijas, siendo que los hechos se ha realizado el día 09 de julio del 2020 a las 15:00 horas aproximadamente, la agraviada ZAIDA JACKELINE NEGRETE LLONTOP, fue víctima de violencia familiar en la modalidad de agresión psicológica, por parte de su ex conviviente MARCO ANTONIO FARROÑAY DIAZ, en circunstancias que esta se encontraba en su domicilio ubicado Manzana N Lote 18 Urbanización Los Precursores del distrito de Chiclayo, en compañía de su menor hija de iniciales M.C.F.N. (09) y JOSÉ ANTONIO CASTRO FERRE NEYRA, escuchando que tocaron la puerta, por lo que, se acercó a la ventana, y pudo observar que se trataba del acusado y sus hijas Jacki y Milenka, empezando este</p>

	<p>a hacerle gestos, mientras le dijo “concha de tu madre”, “sal que te voy a sacar su mierda”, “saca a tu marido que lo va a matar”, “ha tirado piedras a la puerta” y “ha roto algunas lunas”, motivo por el cual, se alejó y se metió al baño con su menor hija, llamando en esos instantes a la línea 100 para pedir apoyo, mientras que José se quedó en la sala y filmaba todo lo que estaba pasando, ya que volvió a romper más lunas de la puerta, luego de ello, cuando ya salió del baño, vio que se estaban yendo, llegando minutos después, la policía a quienes les indicó que contaba con medidas de protección, y cuando la dirigían a interponer su denuncia, esta se sintió mal y fue llevada al Hospital Las Mercedes, donde fue atendida y luego llevada a la comisaria.</p>
Fundamentos del Juzgado:	<p>Al tratarse de una conclusión anticipada, el juez aprueba la misma y convierte la pena a prestación de servicio</p>
Análisis del tesista	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al</p>

	<p>hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p>
--	---

3.1.2. Exp. N° 00279-2021-91-1706-JR-PE-05

Fecha:	25 de agosto de 2021
N° Exp:	

	Exp. N° 00279-2021-91-1706-JR-PE-05
Órgano Jurisdiccio nal:	Sexto Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>El acusado RAFAEL MARCOS OLIVERA IDROGO, el día 05 de agosto de 2020 a las 21:20 horas aproximadamente en circunstancias que la agraviada LILIANA YAMUNAQUE CHICOMA llega de la ciudad de Lima a su domicilio ubicado en Sector unidad de solteros N 21 junto a su nieto de iniciales R.A.M.E (08) y mientras se encontraba conversando con su vecina, sale su conviviente y le dice: "ya lárgate de acá, que esperas" y al encontrarse en su cuarto la agarró del cabello, le dio un puñete en la frente, la pateo en la espalda y la ahorco, por lo que su nieto empezó a llorar diciéndole "tío, déjala a mI mamita Lily, te lo suplico, por favor déjala", entonces el acusado llegó con un machete por lo que la agraviada se encondió debajo de la cama y su conviviente movía la cama y luego fue a dejar el machete para jalarla de las piernas.</p>
Fundament os del Juzgado:	En este caso, al existir un pedido de conclusión anticipada el juez decide aprobarla e impone una pena privativa convirtiéndola en efectiva

Análisis del tesista	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad.</p>
-------------------------	---

3.1.3. Exp. N° 00559-2018-20-1706-JR-PE-06

Fecha:	16 de abril de 2021
N° Exp:	00559-2018-20-1706-JR-PE-06

Órgano Jurisdiccional 1	Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El acusado Ricardo Anderson Bazán Coronel, el día 13 de abril de 2017 a las 21:00 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Panamá Mz.13 Lt. 07 CP La Unión – Pomalca, donde convive con Cindy Massiel Moreno Valdiviezo, madre del menor Sandro Dared Valega Moreno, golpeó al menor presionando su rostro contra la cama, dejando su nariz ensangrentada y una hinchazón en el labio superior-
Fundamentos del Juzgado	En este caso aprobó también el pedido de conclusión anticipada y decidió suspender el plazo de pena efectiva.
Análisis del tesista	En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, no obstante se aprecia que, pese a la prohibición

	<p>normativa respecto a que no posible aplicar la suspensión de la ejecución de la penal en este delito, el juzgador ha aplicado esta figura penal, imponiendo las reglas de conducta prevista por dicha norma, no obstante consideramos que si bien se justifica en criterios de proporcionalidad la decisión emitida por la judicatura, se debió construir una fundamentación lógica y consistente, delimitada con argumentos jurídicos, respecto a las razones que motivaron su decisión de apartarse de la norma prohibitiva, a efectos de que no sea pasible de nulidad.</p>
--	---

3.1.4. EXP. N° 2208-2021-26-1706-JR-PE-03

Fecha:	15 de octubre de 2021
N° Exp:	EXP. N° 2208-2021-26-1706-JR-PE-03
Órgano Jurisdiccional	Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	Se le imputa al acusado haber agredido físicamente a su conviviente Rosa Melisa Farroñan Inoñan, el día 28 de febrero de 2020 a las ocho de la mañana, aproximadamente, en circunstancias en que la agraviada se encontraba en su domicilio con su menor hija, cuando de pronto el acusado empezó a

	<p>reclamarle por que el día anterior se había ido a visitar a sus padres a Morrope, llevándose a su hija y regresado en horas de la noche, pese a que aquel le había dicho que le disgusta que se vaya tan lejos, por lo cual le profirió insultos y además la agredió físicamente con bofetadas, le jalo los cabellos, la cogió fuertemente del cuello provocando que se cayera y se golpeará la rodilla izquierda, hasta que finalmente se retiró del domicilio.</p>
Fundamentos del Juzgado	<p>En este caso también existió una sentencia de conformidad, por lo que se impuso una pena efectiva que luego fue convertida en trabajos comunitarios</p>
Análisis del tesista	<p>En el presente caso se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p>

3.1.5. Exp. N° 02445-2019-7-1706-JR-PE-08

Fecha:	17 de agosto de 2020
N° Exp:	Exp. N° 02445-2019-7-1706-JR-PE-08
Órgano Jurisdiccional	Octavo Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo – Ferreñafe
Hechos materia de imputación	<p>El día 28 de julio de 2018 en horas de la tarde, la agraviada Tania Danixa Rojas Tocto recibió una llamada de su ex conviviente José Junior Oblitas Jaramillo, quien empezó a reclamar seguido. Siendo así, en circunstancias que la agraviada se encontraba haciendo unos cobros por encargo de la madre del acusado de mentadas de madre hacia la agraviada por una foto que había publicado en Facebook, ante dichos insultos la agraviada opta por cortar de inmediato la llamada; sin embargo, el acusado vuelve a llamarla preguntándole si le molesta que la llame, acordando en ese momento conversar personalmente en la noche. Siendo así, en circunstancias que la agraviada se encontraba haciendo unos cobros por encargo de la madre del acusado en el paradero de Pimentel, llegó el acusado PODER JUDICIAL DEL PERÚ empezando a insistirle para que retomen la relación, luego continua con los reclamos por la foto que la agraviada había</p>

	<p>publicado en Facebook, diciéndole: “concha de tu madre,, pareces una perra buscando marido”; después la sube a un carro y se dirigen hasta Pimentel, en el camino continuaba con los reclamos diciéndole: “eres madre de familia y no deberías tomarte fotos así concha de tu madre”, queriendo que la agraviada le dé la razón. Que estas agresiones verbales se han suscitado reiteradamente, ocasionando en la agraviada una afectación psicológica conforme se concluye en el informe Psicológico N° 82-2018/MINP/PNCVFS/CEM.CHI/PSI.SPML de fecha 16 de agosto de 2018.</p>
Fundamentos del juzgado	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
Análisis del tesista	<p>No debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo la agraviada requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto, se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>

3.1.6. Exp. N° 03759-2020-22-1706-JR-PE-08

Fecha:	6 de enero de 2022
N° Exp:	03759-2020-22-1706-JR-PE-08
Órgano Jurisdiccional	Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>El acusado CARLOS LUIS MORALES HUAMAN, que el 10 de setiembre de 2019 a las 22.00 horas aprox. En el domicilio ubicado en la calle los Lirios N°175 PJ Enrique López Albújar Chiclayo , agredió psicológicamente a su es conviviente ERIKA PATSY SEDAMANO BASRASALLO insultándola con palabras soeces perra, puta, pendeja de mierda, denigrado su condición como mujer, al insinuar que lo estaba siendo infiel así como reclamaba el hecho de estar pintada y arreglada , lo que corrobora con el informe Psicológico N° 0470-2019/MIMP/PNCCVFS/CEM-CHI/PSI, la cual concluye que la agraviada presenta afectación psicológica, asociado a los maltratos psicológicos denunciados, identificado como agresor a su ex conviviente, hecho que se produjo en su condición de mujer en un contexto de VIOLENCIA FAMILIA Y DE ABUSO DE CONFIANZA , pues el acusado y la víctima tiene una relación de ex conviviente con un hijo en común.</p>

Fundamentos del Juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo la agraviada requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.

3.1.7. Exp. N° 3958-2019

Fecha:	25 de setiembre de 2020
N° Exp:	3958-2019
Órgano Jurisdiccional	Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo

Hechos materia de imputación	El veinte de setiembre del dos mil dieciocho a las seis y treinta de la mañana se produjo una agresión física contra la agraviada dentro de su domicilio, el acusado la agredió, lo que se ve reflejado en el certificado médico legal que concluyó con un día de atención facultativa por cinco días de incapacidad médico legal.
Fundament os del juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y

	especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad.
--	---

3.1.8. Exp. N° 04199-2018-79-1706-JR-PE-08

Fecha:	5 de abril de 2022
N° Exp:	04199-2018-79-1706-JR-PE-08
Órgano Jurisdiccional	Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>En atención a que con fecha 20 de octubre CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE SÉTIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CHICLAYO del 2017 a las 23:30 horas aproximadamente, la agraviada al encontrarse delicada de salud, se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en la calle Avenida Arequipa N° 865, Pasaje Los Gorriones - Chiclayo; e n esos momentos llega el acusado, quien es su ex conviviente, quien la empieza a preguntarle que le pasaba y como ella conocía sus relaciones es que le respondió que no le sucedía nada. Sin embargo, el acusado continuaba con la misma pregunta sin creer en la respuesta dada por la agraviada, comenzando a decirle que</p>

	<p>seguro tenía otro enamorado, empezando a insultarla diciéndole palabras soeces y denigrantes para su condición de mujer, propinándole puñetes en la cara en presencia de su menor hija, tomando la decisión la agraviada de retirarse de la casa debido a las constantes agresiones del acusado.</p>
<p>Decisión:</p> <p>(respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es suspendida en su ejecución.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, no obstante se aprecia que, pese a la prohibición normativa respecto a que no posible aplicar la suspensión de la ejecución de la penal en este delito, el juzgador ha aplicado esta figura penal, imponiendo las reglas de conducta prevista por dicha norma, no obstante consideramos que si bien se justifica en criterios de proporcionalidad la decisión emitida por la judicatura,</p>

	se debió construir una fundamentación lógica y consistente, delimitada con argumentos jurídicos, respecto a las razones que motivaron su decisión de apartarse de la norma prohibitiva, a efectos de que no sea pasible de nulidad.
--	---

3.1.9. Exp. N° 04823-2019-54-1706-JR-PE-02

Fecha:	2 de marzo de 2020
N° Exp:	04823-2019-54-1706-JR-PE-02
Órgano Jurisdiccional	Sexto Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El acusado Luis Eduardo Rodríguez Falla, el día 26 de enero del 2019 a las 15:00 horas aproximadamente, agredió físicamente a su primo, al agraviado Guillermo Enrique Rodríguez Salazar, en circunstancias en que el agraviado se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la calle Pedro Ruiz N°2024 - P.P.J.J - San Antonio - Chiclayo, momento en que llega el acusado portando una arma blanca (cuchillo) al parecer en estado de ebriedad y empezó a agredirlo físicamente, propinándole puñetes y patadas.

Decisión: (respecto a las penas)	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	No debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.

3.1.10. Exp. N° 6089-2019-84-1706-JR-PE-06

Fecha:	10 de octubre de 2022
N° Exp:	6089-2019-84-1706-JR-PE-06

Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>El día 14 de marzo de 2019, a las 21:00 horas aproximadamente, en circunstancias en que la agraviada LEYLA PATRICIA ESPINO MENDOZA, junto al investigado JOSEPH MICHEL SOSA SANDOVAL, su conviviente, viajaban a bordo de un vehículo de transportes de trabajadores desde la empresa GANDULE-Motupe, hacia esta localidad, en compañía de otros obreros; siendo el caso que al encontrarse en la carretera del trayecto Ferreñafe hacia Picsi, el referido acusado empezó a increparle a la agraviada el motivo por el cual se reía en el trabajo con otros obreros, procediendo en ese instante a quitarle sus lentes, los cuales rompió, generando que la agraviada se quedara callada a fin de evitar discusiones en presencia de los trabajadores, para luego tras encontrarse en la ciudad de Picsi, y descender del vehículo a la altura del Grifo PRIMAX, esta vez el acusado le arrebató su mochila que contenía sus documentos personales y herramientas de trabajo, atinando la agraviada a reclamarle que le devolviera su mochila, el mismo que le respondió con palabras groseras, para luego agredirla físicamente propinándole un golpe de puño en su rostro, retirándose del lugar de los hechos.</p>
Fundamentos del Juzgado	En cuanto a la pena de inhabilitación, siendo una pena principal conjunta, corresponde fijarla conforme a los parámetros tomados

	<p>en cuenta para la fijación de la pena privativa de la libertad, esto es, que corresponde imponerla conforme a los alcances del artículo 36 inciso 11 del Código Penal, y por el periodo de DIEZ MESES Y NUEVE DIAS. vi) En ese mismo sentido, cabe precisar que, conforme al acuerdo arribado, corresponde también que el imputado realice un tratamiento especializado o psicológico en el centro de salud más cercano a su domicilio, con la finalidad de que pueda corregir su conducta y evitar futuros hechos de la misma naturaleza.</p>
<p>Decisión:</p> <p>(respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>No debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>

3.1.11. Exp. N° 06175-2021

Fecha:	21 de abril de 2023
N° Exp:	06175-2021
Órgano Jurisdiccional	Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe
Hechos materia de imputación	<p>La denunciante y el denunciado, son cónyuges tienen un hijo en común de iniciales C.D.B.A de 16 años de edad, es así que la agraviada MANUELA ARTEAGA SANCHEZ, denunció haber sido víctima de violencia psicológica por parte de su cónyuge SEGUNDO JUAN BARBOZA HEREDIA, en circunstancias, que el día 05 de julio de 2020 a las 14:00 horas, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Héroes de Cenepa M. P Lote 19 CPM La Unión - Pomalca, llegó el denunciado del trabajo, amargo, agresivo, se fue a bañarse, y se puso a insultarla de puta, mentándole la madre, la mierdeó y carajeó, le dijo, "ahora estarás contenta", en referencia a que ella estaba conversando por teléfono y pensó que se comunicaba con el padre de sus primeros hijos, él siempre la ceta, le dijo, que acaso, él no se va a dar cuenta, que le está sacando la vuelta, y luego salió a tender su ropa, y llegó su vecina Darlyn a decirle que su esposo, si le estaba enseñando, a manejar la moto, enterándose en ese momento de ese hecho,</p>

	<p>refirió que luego su esposo salió a la calle para denunciarla, mintiendo, que ella lo había agredido y luego regresó a su casa, luego de horas para insultarla sin motivo alguno, mentándole la madre y diciéndole que no iba a salir de la casa, así sea que lo maten, insultándola en todo momento. Agregando, que no es la primera vez, que lo hace siempre llega de su trabajo y la insulta, viene sufriendo desde hace once años, estos maltratos psicológicos, pero no lo denunció por el bienestar de su familia y desea que se retire de su domicilio. Las agresiones psicológicas se han corroborado mediante el Informe Psicológico N° 351-2020 realizado a MANUELA ARTEAGA SANCHEZ DE BARBOZA concluyendo que: "A la fecha de la entrevista y evaluación presenta afectación psicológica por hechos de violencia familiar, relatando con detalle y coherencia los hechos violentos que ha sufrido, con frecuencia intermitente como gritos, insultos, humillaciones; Presentando indicadores cognitivos, emocionales y conductuales (...)"</p>
Fundamentos del Juzgado	<p>3.1.- En relación al control de legalidad del juicio de tipicidad, el Ministerio Público señaló que la denunciante y el denunciado, son cónyuges tienen un hijo en común de iniciales C.D.B.A de 16 años de edad, es así que la agraviada MANUELA ARTEAGA SANCHEZ, denunció haber sido víctima de violencia psicológica por parte de su cónyuge SEGUNDO JUAN BARBOZA HEREDIA, en circunstancias, que el día 05 de julio de 2020 a las 14:00 horas, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle</p>

	<p>Héroes de Cenepa M. P Lote 19 CPM La Unión - Pomalca, llegó el denunciado del trabajo, amargo, agresivo, se fue a bañarse, y se puso a insultarla de puta, mentándole la madre, la mierdeó y carajeó, le dijo, "ahora estarás contenta", en referencia a que ella estaba conversando por teléfono y pensó que se comunicaba con el padre de sus primeros hijos, él siempre la ceba, le dijo, que acaso, él no se va a dar cuenta, que le está sacando la vuelta, y luego salió a tender su ropa, y llegó su vecina Darlyn a decirle que su esposo, si le estaba enseñando, a manejar la moto, enterándose en ese momento de ese hecho, refirió que luego su esposo salió a la calle para denunciarla, mintiendo, que ella lo había agredido y luego regresó a su casa, luego de horas para insultarla sin motivo alguno, mentándole la madre y diciéndole que no iba a salir de la casa, así sea que lo maten, insultándola en todo momento. Agregando, que no es la primera vez, que lo hace siempre llega de su trabajo y la insulta, viene sufriendo desde hace once años, estos maltratos psicológicos, pero no lo denunció por el bienestar de su familia y desea que se retire de su domicilio. Las agresiones psicológicas se han corroborado mediante el Informe Psicológico N° 351-2020 realizado a MANUELA ARTEAGA SANCHEZ DE BARBOZA concluyendo que: "A la fecha de la entrevista y evaluación presenta afectación psicológica por hechos de violencia familiar, relatando con detalle y coherencia los hechos violentos que ha sufrido, con frecuencia intermitente como gritos,</p>
--	--

	insultos, humillaciones; Presentando indicadores cognitivos, emocionales y conductuales (...)"
Decisión: (respecto a las penas)	Aprobación de conclusión y condena la cual es de carácter efectiva.
Análisis del tesista	No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo la agraviada requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto, se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.

3.1.12. Exp. N° 06465-2021-30-1706-JR-PE-06

Fecha:	24 de mayo de 2022
N° Exp:	06465-2021-30-1706-JR-PE-06

Órgano Jurisdiccional 1	Octavo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>El acusado y la agraviada, han tenido una relación de convivencia de treinta años producto de la cual han procreado seis hijos, los cuales son mayores de edad, han domiciliado en Mz. 3. Lt 5, Centro Poblado Unión-Pomalca; asimismo, se probará que con resolución número dos en el Exp. 216-2016, el Primer Juzgado de Familia de Chiclayo con fecha dos de febrero del dos mil dieciséis, dictó medidas de protección a favor de la agraviada en contra del acusado por hechos ocurridos el veinticinco de diciembre del dos mil quince, donde el acusado en ese entonces amenazó de muerte con arma blanca, con un cuchillo a la ahora agraviada. Asimismo, se probará que, el día veintinueve de enero del dos mil veintiuno, a las catorce horas aproximadamente, el acusado agredió físicamente a la agraviada, lanzándole un palo por las piernas, lanzándole los platos de comida por los pies, amenazándola, diciéndole que no se iría si no la dejaba medio muerta, insultándole, mentándole la madre, hechos que se subsumen en el art. 122-B.</p>
Fundamentos del Juzgado	<p>a. Hechos probados. 1.- Se encuentra probado que al día 29 de enero del 2021, la agraviada María Luz Vásquez Collantes, presenta lesiones corporales en ambas caras (anterior y posterior) de la pierna derecha, causada con un palo, con una fuerza muy</p>

	<p>leve. Así se verifica del Certificado Médico Legal N° 002115-VFL su fecha 29 de enero del 2021; en el que se describieron que en dicha fecha la agraviada presentaba lesiones traumáticas externas de origen contuso, consistente en Herida superficial de 0.6 x 0.2. cm con costra serosa en cara anterior tercio medio de pierna derecha. Así como Tumefacción y equimosis rojiza de 5x4cm en cara posterior de pierna derecha. En el examen pericial, el profesional refirió categóricamente que dichas lesiones se corresponden con un palo; conforme lo refirió la evaluada y consta en la Data del certificado donde consignó: “refiere que fue víctima de agresión física el día 29.01.21 a las 14:00 horas aproximadamente por parte de su conviviente con palazos en la pierna”. Además, refirió que la equimosis rojiza y la costra serosa, se producen dentro del máximo de seis horas de haberse producido la lesión, por lo que cobra vigencia el relato de la agraviada de haberse producido el mismo día de la evaluación. Asimismo, ante el contra interrogatorio dejó asentado que dichas lesiones se produjeron con una “fuerza muy leve” para poder ocasionar estos dos tipos de lesiones, que es la equimosis y la tumefacción y también había una herida superficial, por el mismo palo a veces tiene unas pequeñas astillas o tiene unos bordes romos irregulares y eso al ser lanzado sobre el cuerpo causa una herida superficial. 2.- Se encuentra probado que estos hechos se realizaron en el interior del domicilio de la Víctima y agresor. Esto se encuentra determinado con el Acta de Intervención policial de</p>
--	---

	<p>fecha 29 de enero del 2021, donde se plasma: “...en compañía de la agraviada nos constituimos al lugar d ellos hechos ubicado en la Calle Panamá Mz. 3, lote 05...”. En su relato ante el Plenario el testigo Gerardo Fabian Chávez Reaño, efectivo policial interviniente manifestó que “la agraviada llegó llorando a la comisaría indicando que había sido agredida e insultada por su pareja, entonces se constituyeron en compañía de ella al domicilio...”. La misma agraviada refirió que los hechos sucedieron “cuando le estaba dando su comida, su almuerzo, cuando llegaba del corte...”; lo que es confirmado por el imputado cuando dijo: “...había venido de trabajar a eso de las dos, dos y media de la tarde y encuentra a su señora molesta en la casa...”.</p> <p>3.- Se encuentra probado que las lesiones fueron realizados por el acusado. Esto se determina por la propia declaración de la agraviada, quien ha señaló: que el acusado al llegar a su casa luego del corte, es decir del trabajo agrícola, ella le reclama una infidelidad, momento en que el acusado “primero le tiró con el palo en su pierna, después de eso, le puso los platos en la mesa para que coma, cuando ya se amargó, le aventó los platos en su estómago, en su cuerpo..”; esta declaración guarda todos los requisitos exigidos para ser valorados como prueba incriminante, conforme a los términos del Acuerdo Plenario 05-2016-CIJ-116; así se tiene: A. Carece de Incredibilidad subjetiva. En este apartado se debe tener presente lo expresado en el referido acuerdo plenario (f. 15); cuando dice: “...como es evidente, no se</p>
--	---

	<p>puede poner en tela de juicio la credibilidad del testimonio de la víctima por el hecho de ser tal”; En el presente caso, la defensa ha esgrimido como argumento que el comportamiento del acusado se debió a los celos de la agraviada quien le reclamó una relación con otra mujer, y esto es cierto porque la agraviada refirió en todo momento: que le reclamó “bonitamente”, le dijo que antes que comiera, quería hablar con él y le dijo que “esa mujer se ha ido a la casa de tu mamá a hacer problemas, que tú sigues con ella” y él le dijo que no, que como cree en esa mujer y ella le dijo que “si estas con ella mejor sigue tu camino, yo quiero vivir sola en mi casa”; sin embargo, justificar la agresión sufrida por este motivo u otro que haya propiciado el ataque de ira del ahora acusado, seria reafirmar el estereotipo de considerar que la mujer merece ser golpeada ante cualquier reclamo porque no lo puede hacer ya que debe tolerar cualquier comportamiento de posible infidelidad del varón; es decir se pretende justificar que ante un acto de agresión verbal, debe ser respondido con otra agresión verbal o física. Por tanto no existe una incredibilidad subjetiva siendo que la víctima ejerció su derecho de buscar protección de la autoridades policiales. B. La Declaración es Verosímil. Esto es contundente, coherente y creíble, en tanto primero relata el evento agresor y su contexto; así dijo que esto sucedió cuando el ahora acusado llegó del corte (es decir del trabajo), recuerda el momento en base al cumpleaños de su hija; relata el contexto; esto es una discusión por supuesta infidelidad, al momento de estar sirviéndole el</p>
--	---

	<p>almuerzo; y relata las dos agresiones físicas con diferentes objetos (palo y platos). A más de ello, el relato es verosímil en tanto se corresponde con lo que arroja los otros medios probatorios; así se tiene: 1.- Existe una denuncia oportuna, plasmada en el Acta de Intervención de fecha 29 de enero del 2021 a horas 15:00; donde se señaló: "...el día de la fecha a hora 14:00 aprox., su pareja de nombre Marino Herrera Delgado (56) al momento de llegar del trabajo, le habría insultado y agredido físicamente a raíz de un reclamo que le hace la denunciante por una supuesta infidelidad, tal es el caso que según indica la agraviada, su pareja ante el reclamo le dijo verbalmente "me voy a ir de tu casa conchatumadre, además le tiro unos platos de vidrio para las piernas y con palo de ciruelo le golpeo en ambas piernas...". 2.- Con la declaración del Sub oficial Gerardo Fabian Chávez Reaño, quien se ha ratificado de lo relatado en el Acta de Intervención agregando: "la agraviada se apersonó a la comisaría, indicando de que había sido agredida e insultada por su pareja". 3.- Con el Certificado médico legal Nro. 2115-VFL de fecha 29 de enero del 2021 a horas 18:00; es decir cuatro horas después de los hechos, en el que se describen precisamente lesiones en la pierna derecha; lo que fue realizado con el uso de un palo, conforme lo afirmó el galeno. 4. También existe un indicio antecedente, lo que se corrobora con la Resolución Nro. 2 Exp. 216-2016 del 25 de diciembre del 2015, donde se relata agresiones por violencia familiar en el que usó un cuchillo y amenazas de muerte,</p>
--	---

	<p>revelando el comportamiento agresivo del acusado, esto en tanto, ante la pregunta del despacho si había sido la primera vez, la agraviada, luego de una sonrisa, dijo “hay doctor eso es de antes”; por intermediación se apreció una respuesta espontánea y hasta con cierto sarcasmo, como si la víctima pensase que no se le estaría creyendo sus sindicaciones. 4.- Debe agregarse que la agraviada refirió tener segundo grado (de primaria), ser ama de casa y haber convivido con el acusado, padre de sus hijos treinta años. Este es un indicio de oportunidad para delinquir, pues tenía una pareja con características propias de las víctimas de violencia, esto es que viven bajo dependencia del varón. C. La declaración es persistente y no existen contradicciones que descalifique la sindicación, debiendo tener presente que no es necesario un relato exacto, si no más bien con elevada probabilidad de la realización de los sucesos, existiendo persistencia en la incriminación tanto de los hechos como de la autoría, en tanto en todo momento señala a su conviviente y sobre los hechos la persistencia se desprende de:</p> <p>1°.- Del acta de Intervención policial del mismo día de ocurrido los hechos (enero del 2021), donde dijo que le tiro el palo en ambas piernas; 2°.- De lo relatado y tomado en cuenta por el Juzgado de Familia en el Exp. 01328-2021, fundamento 3ro., en el que relata que le tira un palo por los pies, posteriormente le tiró los platos; 3°.- Con la Data del Certificado Médico Legal, donde señala “agresión física ...palazos en la pierna”; y 4°.- En el mismo juicio marzo del 2022, señaló que le tiró un palazo en la pierna.</p>
--	---

	<p>En este punto debe considerarse que la agraviada, efectivamente no es clara en señalar si el acusado le tiró con el palo directamente o el mismo le ha caído luego que el acusado lo tiro al piso, conforme él lo ha manifestado; si tomamos en cuenta lo que se refirió a nivel del juzgado de familia y conforme está plasmado en el fundamento tercero de la Resolución Nro. 01 del Exp. 1328-2021 “tirándome un palo por mis pies”; se condice precisamente con lo relatado por el acusado quien señalo que tiro el palo al piso y este rebotó y le cayó a la agraviada; revela entonces que efectivamente el causante de la lesión es el acusado, producto de arrojarle el referido palo. 4.- Se encuentra probado que fue en un contexto de violencia familiar, generado por celos de la victima hacia el agresor. Conforme al artículo 07 de la Ley 30364, se consideran integrantes del grupo familiar a los convivientes; siendo que tanto agraviada como acusado han asentido que convivían al momento de los hechos, y estos se han dado por un reclamo de infidelidad que habría cometido el acusado; entonces si se considera familia a los convivientes y las agresiones han surgido cuando ambos convivían, se presenta el contexto de violencia familiar.</p>
<p>Decisión: (respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.</p>

Análisis del tesista	<p>En el presente caso no se llegó a una conclusión anticipada del juicio, sino se realizó la etapa de juzgamiento, donde se dio la actuación de pruebas, arribando a la conclusión el juzgador de que el testimonio de la agraviada, única testigo de los hechos, resulto ser verosímil, desprovisto de incredibilidad subjetiva y persistente en el tiempo, siendo que decide emitir condena, no obstante, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de las penas, convierte la pena privativa de libertad a prestación de servicios comunitarios. Mención aparte debe hacerse del enfoque de género que el juez utilizó para emitir su decisión la cual consideramos acertada, ya que analizó el hecho de violencia perpetrada contra la agraviada y que justamente se realizaba por su condición de tal.</p>
-------------------------	--

3.1.13. Exp. N° 06535-2019-42-1706-JR-PE-08

Fecha:	31 de agosto de 2020
N° Exp:	06535-2019-42-1706-JR-PE-08

Órgano Jurisdiccional 1	Octavo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo - Ferreñafe
Hechos materia de imputación	<p>El día 31 de octubre de 2018 a las 11:20 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada María Rosa Cueva Arana, se encontraba en el inmueble ubicado en la calle Azángaro N°160 – PP.JJ Ampliación Túpac Amaru – Chiclayo, ya que con las lluvias su casa se había afectado, mientras se encontraba limpiando las piedras, para que los obreros puedan trabajar, llego su hermano Segundo Máximo Cueva Arana, quien comenzó a insultarla diciéndole “mañosa de mierda” “quien te ha dado la orden a ti para que estés construyendo” “ahorita voy a traer a mi gente para que pare la obra”, y que también traería a su otro hermano que vive en Pacasmayo, para que le haga problemas y le hagan “cagar”, siendo en ese momento que la señora María Rosa Cueva Arana, respondió los insultos diciéndole “toda la vida me insultas”, recibiendo una cachetada por parte de su hermano el señor Segundo máximo Cueva Arana, quien posterior a ello, ingresó al inmueble y comenzó a gritarles a los trabajadores de la obra;</p>
Decisión del juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se

	<p>han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p> <p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la</p>
--	---

	<p>conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto, se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>
--	--

3.1.14. Exp. N° 6784-2020

Fecha:	6 de diciembre de 2021
N° Exp:	6784-2020
Órgano Jurisdiccional	Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	La presente causa penal seguida contra la ciudadana JULIANA CAMPOS MORROW en calidad de autora del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Agresión en Contra de la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar – artículo 122 B incisos 06 y 07, en agravio de CARMEN ROSA BRIONES TAPIA.

Fundamentos del Juzgado	<p>3.1.- En cuanto a la medida alternativa propuesta, se tiene que en atención a los extremos de la pena impuesta para el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de lesiones en la modalidad de agresiones en contra la mujeres o integrantes del grupo familiar; así como las características personales del acusado; como son el hecho de no presentar antecedentes penales ni judiciales, y haber cancelado el total de la reparación civil ello resulta viable. 3</p>
Decisión: (respecto a las penas)	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
Análisis del tesista	<p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>

3.1.15. Exp. N° 06795-2020

Fecha:	22 de abril de 2021
N° Exp:	06795-2020
Órgano Jurisdiccional	Quinto Juzgado Supraprovincial Penal de Chiclayo y Ferreñafe
Hechos materia de imputación	Se imputa al acusado RICHARD GERMAN GIL COTRINA, haber agredido física, verbal y psicológicamente a su ex conviviente JESSICA SOLANGE MALCA JARA, el día 14 de enero del 2017, a horas 12:50 horas, cuando la agraviada aún era su conviviente y tenían un hijo en común, acudió al domicilio del imputado ubicado en Urb. La Purísima, Mz 31, Lt 19-A – Chiclayo – Lambayeque, para que este pase tiempo con su menor hijo, generándose una discusión, reclamándole el acusado el por qué le daba quejas a su madre, sobre los incumplimientos que éste tenía con el menor, agrediéndola verbal y psicológicamente, además le profirió un puñete en la quijada, lado derecho y jalones, evitando que la agraviada salga de la casa de su suegra, además indicó que el acusado no cumple con las pensiones alimentarias para su menor hijo y que los maltratos que recibe por parte de este son constantes.

Fundamentos del Juzgado	<p>4.7.- Para lograr los fines antes señalados, nuestro legislador en el título preliminar del Código Penal, ha reconocido como principios más importantes que deber regir la imposición de una pena, los de lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, por lo que serán dichos principios los que nos deben guiar para determinar si la pena propuesta es realmente suficiente para evitar que el acusado RICHARD GERMAN GIL COTRINA, no vuelva a cometer nuevo delito y se comporte conforme a derecho.</p> <p>4.8.- Con respecto al principio de lesividad, si bien es cierto, se tiene que el acusado ha quebrantado la norma penal, se tiene que el acusado ha cancelado parte de la reparación civil en la suma de S/. 300.00 Soles, existiendo compromiso de pago en cancelar en una sola cuota el saldo de S/. 8 300.00 Soles hsta el día 10 de mayo del 2021; advirtiéndose una conducta procesal favorable que permite colegir que ha internalizado su actuar omisivo.</p> <p>4.9.- En cuanto al principio de culpabilidad, si bien el acusado ha aceptado su responsabilidad respecto a su conducta asumida con relación a los hechos, conforme se ha señalado en el párrafo anterior ha internalizado su comportamiento comisivo y las consecuencias que el mismo puede generar en una instancia penal, por lo que una pena privativa de la libertad efectiva solo limitaría la satisfacción de las necesidades de la familia que se vería perjudicada en su apoyo económico y moral.</p> <p>4.10.- En cuanto al principio de proporcionalidad, la Juzgadora considera, efectuado el análisis correspondiente, ante una realidad como la planteada en este caso,</p>
-------------------------	--

	<p>donde el acusado ha cancelado parte de la reparación civil, ha reconocido los hechos comisivos, debe imponerse una pena más benévola a la pena efectiva. 4.11.- Por lo expuesto, la Juzgadora coincide en el acuerdo sobre la pena arribada entre la fiscal y la defensa, resultando en consecuencia idónea, necesaria y proporcional para el caso concreto, no resultando necesario hacer uso de pena mayor a la propuesta, porque si eso fuera así, lejos de cumplir una función de protección a la propia víctima, terminaría perjudicándola; por lo que se concluye que la pena propuesta no sólo resulta idónea, sino además proporcional al hecho y suficiente para los fines de la pena que tiene una función preventiva, protectora y resocializadora prescrita en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, debiendo en consecuencia aprobar el acuerdo en este extremo.</p>
<p>Decisión:</p> <p>(respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto, se requiere de la</p>

	actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.
--	---

3.1.16. Exp. N° 7417-2020-57-1706-JR-PE-07

Fecha:	15 de junio de 2022
N° Exp:	7417-2020-57-1706-JR-PE-07
Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El acusado REYNALDO CARRASCO HUAMAN, el día 02 de julio de 2019, aproximadamente a las 15:40 horas, agredió físicamente a su menor hijo JOSMEL BRAYAN CARRASCO SANCHEZ, quien había sido encontrado por el acusado en un local de internet ubicado en la calle Los Andes 1060 del distrito de La Victoria, y no haber asistido a clases. Las agresiones físicas se encuentran acreditadas mediante Certificado Médico Legal 13047-VFL, de fecha 02 de julio de 2019, que ha concluido que el menor agraviado presenta huellas de lesiones traumáticas recientes de naturaleza contusa, y requiere un día de atención facultativa y cuatro días de incapacidad médico legal.

<p>Decisión:</p> <p>(respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición</p>

	<p>de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p> <p>Se verifica también que, aún cuando no está justificada la violencia intrafamiliar, el juez debió tener en cuenta el contexto en que se llevó a cabo la agresión, esto es dentro de la facultad que tienen los padres para corregir a los hijos ante actos de desobediencia, como en el presente caso en donde el menor fue encontrado en una cabina de internet, en horario de clases, no obstante esta facultad debe ser utilizada correctamente, aduciendo a otras formas menos gravosas de corrección,</p>
--	--

3.1.17. Exp. N° 07900-2018-66-1706-JR-PE-05

Fecha:	26 de octubre de 2020
N° Exp:	07900-2018-66-1706-JR-PE-05
Órgano Jurisdiccional 1	Juzgado Penal Unipersonal Transitorio

<p>Hechos materia de imputación</p>	<p>La agraviada Idonelys Ramírez Herrera, el día quince de abril del año dos mil dieciocho, a las quince horas aproximadamente, habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su conviviente Juan Carlos Gonzaga Mesones, en circunstancias que éste llegó a su domicilio en su vehículo en el cual trabaja como taxista, en ese momento, llegó acompañado de una persona de sexo femenino y una de sus menores hijas en el vehículo, después de asistir a una parrillada, por la parte agraviada Idonelys Ramírez Herrera reclama que debe traer comida para sus hijas mellizas, porque se encontraban sin comer; en ese momento el imputado la empujó y luego hincarle con una llave en su brazo derecho, la agredió propinándole bofetadas en el rostro haciéndole sangrar sus labios; ante tal situación, tuvieron que intervenir los vecinos. Indicó que estos hechos no es la primera vez que hace parte la agraviada, la cual tiene un sin número de denuncias en contra del acusado Juan Carlos Gonzaga Mesones, ya que es una persona agresiva.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>No, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto, se requiere de la actuación de</p>

	políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.

3.1.18. Exp. N° 8416-2019-71-1706-JR-PE-02.

Fecha:	3 de setiembre de 2020
N° Exp:	8416-2019-71-1706-JR-PE-02.
Delito:	Agresión contra la mujer o integrante del grupo familiar
Órgano Jurisdiccional	Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo con competencia en Adición De Materia Ambiental, Tributaria y Aduanera.
Hechos materia de imputación	La presente causa penal seguida contra al ciudadano Anibal Vásquez Sánchez por el delito contra La Vida, El Cuerpo y La Salud, en su figura de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar; previsto en el primer párrafo del artículo 122° - B del Código Penal Vigente, en agravio de Mery Elizabeth Aguilar Rojas.
Fundamentos del juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es consentida a prestación de servicios a la comunidad.

<p>Análisis del tesista</p>	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que</p>
---------------------------------	--

	atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)
--	---

3.1.19. Exp. N° 9159-2018

Fecha:	6 de mayo de 2019
N° Exp:	9159-2018
Órgano Jurisdiccional	Cuarto Juzgado Penal Unipersonal
Hechos materia de imputación	La agraviada ANA MARIA SANCHEZ GALLARDO se encontraba descansando en su domicilio ubicado en calle lajas N° 87 - Posope Alto, siendo que en ese momento escucho que llego su hermano el imputado, quien se encontraba en estado de ebriedad, el mismo que empezó a patear la puerta del dormitorio de su madre LUCILA GALLARDO TORRES, motivo por el cual la agraviada se levanto a ver qué ocurría pero en ese instante el imputado abrió la puerta con una patada, dirigiéndose hacia ella para agredirla físicamente propinándole puñetes y jalones de cabello, es por ello que su madre se interpuso para defenderla pero también resulto agredida físicamente por el imputado, teniendo que intervenir los vecinos para auxiliarlas. Asimismo que en este

	<p>tipo de hechos sucede con frecuencia. Se ha recabado el certificado médico legal N° 001068-VFL donde concluyeron que ANA MARIA SANCHEZ GALLARDO presenta "Lesiones recientes traumáticas de origen contuso": requiriéndole 02 días de atención facultativa y 06 días de incapacidad médico legal y en el caso de LUCILA GALLARDO TORRES según el certificado médico legal N° 001068-VFL, presento "Lesiones recientes traumáticas de origen contuso"; requiriendo 01 día de atención facultativa por cinco días de incapacidad medico lega,. Que la conducta del acusado se adecuaría a lo prescrito en el artículo 122 - B del Código Penal.</p>
Fundamentos del juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es servicios comunitarios
Análisis del tesista	<p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>

--	--

3.1.20. Exp. N° 10408-2018

Fecha:	28 de abril de 2021
N° Exp:	10408-2018
Órgano Jurisdiccional	Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	Según lo indicado por el Ministerio Público, los hechos que dieron origen al presente proceso ocurrieron cuando el acusado agredió a la agraviada, por lo que ésta hizo la denuncia y con el examen pericial se constató las lesiones sufridas por la agraviada.
Fundamentos del juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio,

	<p>y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p>
--	--

3.1.21. Exp. N° 10840-2017-52-1706-JR-PE-06

Fecha:	28 de mayo de 2019
--------	--------------------

N° Exp:	10840-2017-52-1706-JR-PE-06
Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>La fiscalía pretende probar en agravio de Jenny Shashenka Gamonet Berrios, se va probar dos supuestos, uno por violencia psicológica y uno por violencia física, con respecto al primero, se va aprobar que el acusado en tres fecha consecutivas 30 de marzo del 2017, 2 de abril del 2017 y 21 de abril del 2017, en esas tres fechas remite desde su celular a la agraviada mensajes de texto como eres una trans, eres hombre, me divierto con tu frustración, por eso es que no cambio mi numero, es el hecho que se le atribuye al imputado como violencia psicológica, el segundo hecho es que el día 28 de junio del 2017, cuando la agraviada se encontraba caminando entre las intersecciones de la calle Izaga y Alfonso Ugarte es interceptada por el ahora acusado, quien inicialmente le indica trans no me sigas , para lo cual la agraviada le replica las razones por la cual este la estaba agrediendo, y ante eso el imputado se le acerca y le procede a dar tres cachetadas en el rostro, y adema la jalonea para tumbarla al suelo, sin embargo, la agraviada logra soltarse y darse a la fuga, de estos hechos la fiscalía se va a acreditar la afectación a la integridad física con el certificado médico legal que en su oportunidad el perito deberá</p>

	<p>explicarlo. La segunda tesis del magistrado es que se le atribuye a la acusada Jenny Shashenka Gamonet Berrios el agraviado del señor Nicanor Humberto Effio Cruz el delito de agresiones físicas, es decir, se va demostrar que el día 28 de junio del 2017, cuando el agraviado estaba transitando las calles de Alfonso Ugarte y María Izaga es interceptado por la acusada, y ella procede a golpearlo con puñetes en el brazo, y que además lo araña en el pecho y le rompe la camisa, para que el agraviado avance, y es que el acusada va detrás él, y lo empieza a insultarlo, y lo jalonea en el cuello en la parte de la nuca, generando las lesiones descritas en el certificado médico legal que serán oralizados.</p>
<p>Decisión: (respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad, imputaciones recíprocas.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>En el presente caso no se llegó a una conclusión anticipada del juicio, sino se realizó la etapa de juzgamiento, donde se dio la actuación de pruebas, arribando a la conclusión el juzgador de que el testimonio de la agraviada, resulto ser verosímil, desprovisto de incredibilidad subjetiva y persistente en el tiempo, siendo que decide emitir condena, no obstante, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de las penas, convierte la pena privativa de libertad a prestación de servicios comunitarios. Mención aparte debe hacerse del enfoque de género que el juez utilizó para emitir su decisión la cual consideramos acertada, ya</p>

	<p>que analizó el hecho de violencia perpetrada contra la agraviada y que justamente se realizaba por su condición de tal. Asimismo se logró acreditar que las agresiones fueron recíprocas, por lo que se condena también a la agraviada como autora del referido delito.</p> <p>Es un caso de imputaciones recíprocas.</p>
--	--

3.1.22. Exp. N° : 11408-2018-22-1706-JR-PE-08

Fecha:	7 de octubre de 2019
N° Exp:	11408-2018-22-1706-JR-PE-08
Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El día 25 de mayo del 2018 a las 20:31, agredió físicamente a su conviviente, la agraviada Cecilia Maribel Manay Asalde, quien se encontraba en su domicilio ubicado en la Avenida Quiñones cuadra 09, en circunstancias en que empezó a agredirla con jalones, una patada en la altura del estomago, un puñete a la altura de la frente, ahorcamiento por parte del denunciado con quien tiene una convivencia de 18 años y dos hijos.
Fundamentos del juzgado	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida en cumplimiento de trabajos comunitarios.

Análisis del tesista	<p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>
-------------------------	---

3.1.23. Exp. N° : 11419-2019-50-1706-JR-PE-01

Fecha:	6 de enero de 2020
N° Exp:	11419-2019-50-1706-JR-PE-01
Delito:	
Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo
	<p>El día 25 de mayo del 2018 a las 20:31, agredió físicamente a su conviviente, la agraviada Cecilia Maribel Manay Asalde, quien se encontraba en su domicilio ubicado en la Avenida Quiñones cuadra 09, en circunstancias en que empezó a agredirla con</p>

Hechos materia de imputación	jalones, una patada en la altura del estomago, un puñete a la altura de la frente, ahorcamiento por parte del denunciado con quien tiene una convivencia de 18 años y dos hijos.
Fundamentos del Juzgado	En consecuencia, los hechos expuestos se subsumen en el delito de Agresiones en contra de la Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar previsto en el primer párrafo del artículo 122°-B, por cuanto el acusado Luis Alberto Fernandez Meoño ha aceptado haber agredido físicamente a su conviviente Cecilia Maribel Manay Asalde, conforme se ha acreditado en el Certificado Médico Legal N° 9155-VFL, en el que concluye que sufrió lesiones traumáticas recientes de origen contuso requiriendo 2 días de atención facultativa por 5 días de incapacidad médico legal.
Decisión: (respecto a las penas)	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la

	<p>ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p> <p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la</p>
--	--

	actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.
--	---

3.1.24. Exp. N° : 02627-2019-28-1706-JR-PE-06

Fecha:	1 de octubre de 2020
N° Exp:	02627-2019-28-1706-JR-PE-06
Órgano Jurisdiccional	Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El día 28 de julio de 2018 al promediar las 23:45 horas, la agraviada Diana Carolina Guerrero Paredes, en compañía de su hermana Karla Fiorella Morales Paredes y su menor hija, se dirigió al domicilio de su ex conviviente, el imputado Frank Anthony Reyes Hoyos con la finalidad de que éste le entregara dinero, puesto que su menor hija se encontraba mal de salud. Sin embargo, este hecho incomodó al acusado, pues como se encontraba celebrando su cumpleaños, salió y llevó a un costado del inmueble a la agraviada, donde la insultó y agredió físicamente, propinándole golpes en la cabeza, puñetes y patadas en diferentes partes del cuerpo, siendo que luego salieron Helen

	<p>Patricia Reyes Hoyos y Leslie Karina Lozada Hoyos, hermana y prima del acusado, quienes también la agredieron. En tal sentido, la agraviada pidió que le entregara a su menor hija, quien había ingresado al domicilio, pero en un inicio se negaron a hacerlo, teniendo que solicitar apoyo a uno de sus tíos, quien llegó al lugar. Posteriormente le entregaron a la menor y se retiraron del lugar, decidiendo formular la denuncia; hechos que han sido advertidos conforme al certificado médico legal y protocolo de pericia psicológica practicado a la agraviada, en la que determina efectivamente que la agraviada presenta signos de lesiones físicas y afectación psicológica, como consecuencia de estos hechos se ha advertido que estos se circunscriben dentro del tipo que establece el artículo 122-B segundo párrafo inciso 5 del Código Penal.</p>
Fundamentos del Juzgado	<p>a) Está probado que el día 28 de julio de 2018 a las 23:45 horas aproximadamente, el acusado Frank Anthony Reyes Hoyos ha agredido a su ex conviviente Diana Carolina Guerrero Paredes, en circunstancias que esta ha concurrido al domicilio del acusado. Probado con la declaración testimonial de la agraviada, quien al ser examinada nos ha señalado que el día de los hechos se ha constituido, conjuntamente con su hermana Karla Fiorella Morales Paredes y su menor hija, al domicilio de su ex conviviente, el imputado Frank Anthony Reyes Hoyos, con la finalidad de que éste le entregara dinero, puesto que su menor hija se encontraba mal de salud. Sin embargo, al proceder a reclamarle</p>

	<p>al acusado los motivos por el cual no le estaba dando para los gastos de su menor hija que ambos tienen en común, lo cual este hecho incomodó al acusado, quien se encontraba departiendo de una reunión familiar, procediendo a insultarla y agredirla físicamente, jalándole del brazo hacia la puerta de la casa, agrediéndola con puñetes y patadas; probado, además con la propia declaración en parte del acusado, quien no ha negado que la agraviada se ha constituido a su domicilio y es en circunstancia que éste se encontraba recibiendo a los invitados para la celebración por 28 de julio, es cuando se ha presentado la agraviada y le ha empezado hacer reclamos. b) Está probado que la agraviada Diana Carolina Guerrero Paredes al efectuar reclamos al acusado, motivó que éste la agrediera físicamente, ocasionándole las lesiones que se encuentran descritas en el Certificado Médico Legal N°0012842- VFL, donde se concluye que la agraviada presenta lesiones, requiriendo dos días de atención médico facultativa por siete días de incapacidad médico legal. Probado con el certificado médico legal, expuesto por la perito, Médico Legista Sheila Marilyn Charcape Lescano, quien refiere que al examen la agraviada presenta equimosis violácea de 2 x 1 cms, en región central parte anterior del antebrazo izquierdo, con presencia de signos inflamatorios peri lesionales leves, además de escoriación tipo roce de 0.3 x 0.2 cms en región posterior parte distal de antebrazo derecho con presencia de signos peri lesionales leves, concluyendo que presenta huellas de</p>
--	---

	<p>lesiones recientes de naturaleza contusa. Con lo cual se corrobora las agresiones sufridas por la agraviada Diana Carolina Guerrero Paredes, hechos atribuidos al acusado Frank Antony Reyes Hoyos. c) Está probado que la agraviada Diana Carolina Guerrero Paredes ha sufrido afectación psicológica por parte del acusado Frank Antony Reyes Hoyos, por cuanto constantemente le ha proferido insultos denigrantes, siendo una de ellas, el día que se suscitaron los hechos materia de imputación, en la cual nos ha señalado al ser examinada que el acusado le decía “concha de tu madre” “que me vienes a joder, paras jodiendo” “puta de mierda”, “hija de puta”; lo cual se corrobora con el examen a la perito psicóloga Lelys Farro Panta, quien nos ha explicado respecto a las conclusiones arribadas en la pericia psicológica N° 016610-2018-PSC-VF, señalando que la agraviada Diana Carolina Guerrero Paredes, luego de ser evaluada ha presentado Afectación Emocional y Psicológica asociada a severos maltratos psicológicos, y que en el momento de la evaluación se ha mostrado abrumada, nerviosa, inestable, insegura, con sentimientos de indefensión y desesperanza. d) Está acreditado asimismo, el grado de parentesco existente entre la agraviada Diana Carolina Guerrero Paredes y el acusado Frank Antony Reyes Hoyos. Probado con la propia declaración del acusado y la testimonial de la agraviada quienes han señalado que han sido ex convivientes y además tienen una hija en común.</p>
--	---

Decisión: (respecto a las penas)	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	<p>En el presente caso, la causa fue sometida a juicio, determinándose con grado de certeza que el acusado efectivamente es autor del delito imputado, puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad.</p>

3.1.25. Exp. N° : 2767-2021-67-1706-JR-PE-05

Fecha:	4 de octubre de 2021
N° Exp:	2767-2021-67-1706-JR-PE-05
Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El día 26 de agosto de 2020 a horas 15:00 aproximadamente, agredió a la agraviada en circunstancias en que esta se encontraba dentro de su domicilio ubicado en el Block 17 S/N – Tumán (A espaldas de la plataforma deportiva), arreglándose para salir, lo que motivó a que el acusado le cuestione tal hecho, haciéndole preguntas tales como a dónde va tan apurada, posteriormente la insultó y comenzó un forcejeo entre ambos en el que el acusado terminó por agredir físicamente a la agraviada, además acepta que mediante resolución N° 02 expedida en el Exp. 9950-2019, se le concedió medidas de protección a la agraviada. Agresión conforme al Examen Médico Legal N° 16550-VFL, practicado a la agraviada y que concluye que la examinada requiere un día de atención facultativa y tres de incapacidad médico legal.
Fundamentos:	Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.
Análisis del tesista	Puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al

	<p>principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad.</p>
--	---

3.1.26. Exp. N° : : 04542-2019-86-1706-JR-PE-01

Fecha:	5 de noviembre de 2020
N° Exp:	04542-2019-86-1706-JR-PE-01
Órgano Jurisdiccional 1	Juzgado Unipersonal Transitorio

<p>Hechos materia de imputación</p>	<p>El catorce de julio del dos mil dieciocho, en el cual el acusado agredió a la agraviada generándole lesiones, los cuales han requerido de tres días de atención facultativa por ocho días de incapacidad. En atención a ello, el Ministerio Público presentó el requerimiento por el delito de Agresión en contra de Integrantes del Grupo Familiar y solicita se le imponga UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, una reparación civil de QUINIENTOS 00/</p>
<p>Fundament os del juzgado</p>	<p>El juez aprueba el pedido de conclusión y además convierte la pena efectiva en trabajos comunitarios.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>Puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como</p>

	también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad
--	--

3.1.27. Exp. N° : 08031-2018-51-1706-JR-PE-01

Fecha:	24 de enero de 2020
N° Exp:	08031-2018-51-1706-JR-PE-01
Órgano Jurisdiccional	Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	El día 22 de abril el 2018 a las 20:30 horas aproximadamente, agredió físicamente a su hermana, a la agraviada Magali Eni Velasco Cruz, en circunstancias en que la agraviada se encontraba al interior de su domicilio ubicado en Calle Pascual S/N Urbanización Lurin Manzana L lote 26, tercer piso, donde alquila un cuarto momento en que llega el acusado y le empieza a reclamar porque en el día anterior no había llegado a dormir a su cuarto, al contestarle la agraviada que no tenía derecho a reclamarle nada, el acusado empezó a agredirla físicamente, propinándole puñetes y patadas en sus brazos y rostro.

Fundamentos del juzgado.	Se aprueba la solicitud de conclusión y se convierte la pena privativa en una de imposición de trabajos comunitarios.
Análisis del tesista	No debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.

3.1.28. Exp. N° : 08064-2018-14-1706-JR-PE-01

Fecha:	10 de mayo de 2021
N° Exp:	08064-2018-14-1706-JR-PE-01
Órgano Jurisdiccional	19 de mayo de 2021

<p>Hechos materia de imputación</p>	<p>El día 23 de febrero de 2018, a las 12:51 horas aproximadamente agredió física y psicológicamente a Vásquez Cheng, Karen Vanesa, en circunstancias que esta se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Calle Cajamarca 710, PJ San José Obrero de Chiclayo viendo Tv. en compañía de su conviviente (acusado) se apareció la suegra de la agraviada con actitud molesta para luego retirarse del domicilio. Esta actitud le es atribuida por el acusado a la hoy agraviada. Por lo que le reclama el que no lo atienda y empezó a agredir con cachetadas en el rostro y golpes de puño en distintas partes del cuerpo, ocasionándole lesiones en los dientes y las encías bucales, conforme se acredita con el CML 3411-VFL, que prescribe que la agraviada requiere de un día de atención facultativa por cinco días de incapacidad médico legal.</p>
<p>Fundament os del juzgado</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la</p>

	<p>ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p> <p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo el agraviado requiere de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto se requiere de la</p>
--	--

	actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.

3.1.29. Exp. N° : 8703-2019-74-1706-JR-PE-01

Fecha:	10 de marzo de 2020
N° Exp:	8703-2019-74-1706-JR-PE-01
Órgano Jurisdiccional	Séptimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo
Hechos materia de imputación	<p>YASQUEL MIRELY ZEÑA MERA, el 12 de abril del 2019, profesora de Inglés de Educación del colegio Beata Imelda, Milagros del Rocio Santoyo Cornejo, da cuenta de que la menor Alicia Soledad Zeña Mera se encontraba llorando en clase por lo que dio parte al departamento de psicología, los cuales decidieron citar también a su hermana Yesquel Mirely Zeña Mera, que también estudia en dicha institución, por lo que después de entrevistarse con las menores, decidieron citar a ambos padres. Quienes se apersonaron el día 15 de abril, haciéndoles firmar un</p>

	<p>acta de compromiso brindándoles las pautas y estrategias para abordar en la convivencia, sin embargo con fecha 23 de abril del 2019, al hacérseles el seguimiento a las menores, estas manifestaron que su padre solo había cambiado una semana y que el fin de semana llegó borracho a su casa, escuchando gritos y hasta un golpe, subiendo su mamá a verlas muy asustada y contándoles que ella había estado comiendo y que su papá al verla sin motivo alguno le escupió el plato de comida y en su cara, insultándola, manifestando las menores que su papá siempre hace lo mismo cuando ve a cualquiera comer, porque no le gusta verlas felices. Asimismo, señalan que este siempre les grita, a su abuela, a su hermano y a su mamá, siendo que a esta última le dice que no tiene que ir a jugar vóley porque seguro se va a acostarse con más hombres y le esconde la comida, indicando las menores que tienen mucho miedo llegar a casa y encontrar a su mamá muerta.</p>
Fundamentos del juzgado	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
Análisis del tesista	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo</p>

	<p>además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad.</p>
--	---

3.1.30. Exp. N° : 11317-2019-86-1706-JR-PE-07

Fecha:	26 de agosto de 2021
N° Exp:	11317-2019-86-1706-JR-PE-07
Órgano Jurisdiccional	Octavo Juzgado Penal Colegiado
Hechos materia de imputación	el día 28 de julio del 2019, a las 21:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Isabel Uceda Ruelas, retornó a su domicilio ubicado en la calle Los Olivos, Mz.A - Lote 7 de la Urbanización Aviantel - Chiclayo, se dispuso a descansar en su

	<p>dormitorio, en ese momento su hijo, el acusado Julio Morán Uceda, se percató que su madre estaba en su domicilio y se dirigió hasta la cocina de su hogar, desde donde empezó a insultarla con una serie de palabras soeces y de migrantes en contra de su persona tales como: “Vieja puta, concha de tu madre, lárgate, no te quiero ver, mantén maridos, te gusta que te vivan los chibolos para que los mantengas, que no es un ser humano, que es una caga, una basura”, razón por la cual la agraviada decidió llamar a la policía para que vengan en su apoyo, lo cuál sería escuchado por el acusado, quien empezó a decirle “ve esa mantén maridos” así como indicarle que se iba a cambiar para que la acompañe a la policía cuando vengan, como consecuencia de esta acción violenta, la agraviada presenta indicadores de afectación psicológica, estas afectaciones aparecen en el Informe Psicológico N° 316-2019.</p>
Fundamentos del Juzgado	<p>4.4.En el caso, aplicando el sistema de tercios, nos ubicamos en el tercio inferior que es de 2 años a 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad, al contar únicamente con circunstancias atenuantes genéricas (carencia de 6 de 8 antecedentes penales), así como sus condiciones personales como son su edad (nació el 29/07/1994), grado de instrucción (cuarto grado de primaria) situación que le ha permitido saber en todo momento que los actos cometidos eran contrarios a ley; por otro lado, no se puede perder de vista como contra peso sus carencias económicas y sociales (se infiere se encuentran dentro de las normales), y el daño causado</p>

	<p>(bien jurídico protegido es la salud, igualdad, paz familiar, etc.), por lo que resulta razonable que se haya partido de 1 año¹¹, así como aplicar el descuento del sétimo de la pena como beneficio premial por conclusión anticipada, de este modo la pena concreta arribada dediez meses y nueve días de pena privativa de libertad resulta razonable y proporcional por lo que debe ser así aprobada.</p> <p>4.5. Ahora en cuanto a la pena privativa de la libertad, corresponde señalar que todas son efectivas, siendo que corresponde al juzgador evaluar que ésta sanción guarde perfecta armonía con los fines de la pena, especialmente con la prevención especial, sin que sea necesario en el presente caso, el uso estricto de una pena privativa de la libertad, en la medida que existen otras alternativas, que pueden cumplir eficazmente los fines de la pena de reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad, en ese sentido se advierte que atendiendo a tales circunstancias, y en aplicación de lo establecido en el artículo 52° del Código Penal¹², considera razonable y proporcional, que en este caso la pena sea convertida a cuarenta y cinco jornadas de prestación de servicios a la comunidad, por ser más eficaz para casos como el presente, debiendo disponerse que el organismo a cargo de cumplimiento de la misma le asigne las labores correspondiente.</p> <p>4.6. Asimismo, con respecto a la pena de Inhabilitación, atendiendo a la naturaleza del proceso, donde medió un abuso de poder por parte del acusado, le es aplicable lo establecido en el artículo 36° inciso 11) del Código Penal, consistente en "la prohibición de aproximarse o</p>
--	---

	<p>comunicarse con la víctima con fines de agresión o alterando su tranquilidad", ahora en cuanto a sel mismo periodo de la pena principal, es decir de 10 meses y 9 días, conforme lo faculta el artículo 39° del mismo Código, el mismo que se considera razonable y proporcional.</p>
<p>Decisión:</p> <p>(respecto a las penas)</p>	<p>Aprobación de conclusión y condena la cual es convertida a prestación de servicios a la comunidad.</p>
<p>Análisis del tesista</p>	<p>En el presente caso puede verificarse como a nivel de judicatura se busca aplicar la norma o la pena aplicable al hecho cometido en atención al principio de proporcionalidad de las penas, pues se han analizado las condiciones personales del condenado, en ese caso, carece de antecedentes penales, es relativamente joven y su conducta parece estar orientada al arrepentimiento, atendiendo además a que se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, y aun cuando está proscrito por ley aplicar la suspensión de la ejecución de la pena en esta clase de delitos, el juzgador ha optado por buscar una respuesta proporcional como sanción penal al hecho cometido, optando por la figura de la conversión de la pena, ya que la pena conminada para el delito en comento es no menor de 1 ni mayor de 4 años, por lo que en aras del mencionado principio así como también de cara a los fines generales y especiales de la pena impone la conversión de la pena a prestación de servicios a la comunidad. De lo anterior se colige como el</p>

	<p>juzgador con mejor criterio, busca una mejor salida que la brindada por el legislador al prohibir que se suspenda la ejecución de la pena en casos de violencia familiar y contra la mujer, pues está tomando en cuenta la dignidad del condenado así como el pago de una reparación civil a la víctima así como la prohibición de que el condenado se le acerque e incluso la convivencia social, ya que entiende que la agravación o la generalización de la pena privativa de libertad no va a resolver el problema de fondo que atañe a la criminalidad ocurrida en el seno familiar o en agravio de la mujer por su condición de tal (violencia de género)</p> <p>No obstante, no debe dejarse de lado el aspecto relativo a la salud mental, pues de los hechos que se narran, se aprecia que la conducta del condenado es reiterativa y constante, lo que debe ser también analizado por el juzgador a efectos de incidir en el sometimiento del condenado a terapias psicológicas, esto es no solo las agraviadas requieren de tratamiento psicoterapéutico debido a la afectación psicológica ocasionada. Por tanto, se requiere de la actuación de políticas públicas encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo de quienes resulten más vulnerables.</p>
--	--

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

Respecto al primero objetivo consistente en **determinar si existe relación entre los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal y la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de casos de los años 2019-2021 en los juzgados penales de Chiclayo.**

Del análisis del marco teórico y antecedentes de investigación se verifica que los fundamentos de política criminal que motivaron la inclusión como delito de las agresiones intrafamiliares o los ocasionados a la mujer por el hecho de serlo, guardan relación directa con la aplicación del enfoque de género y de lucha contra la violencia intrafamiliar en la que se ha inmiscuido el Estado para disminuir los índices de incidencia que se suscitan en la práctica, ello en virtud de la normalización histórica de esta clase de conductas, pues antes se consideraba que era cotidiano, propio de la convivencia familiar agredir a los hijos, padres, cónyuge, hermanos o personas que conviven dentro de una misma vivienda, que no originaba mayor daño o consecuencias lesivas a la sociedad. Esta concepción ha sido errónea, pues se trata de bienes jurídicos de especial relevancia, máxime si repercute en las generaciones poblacionales que se desarrollan con graves traumas psicológicos y psíquicos que impiden un normal proceso de maduración física y mental y es muchas veces factor principal de la delincuencia juvenil y por ende de todas las lacras que avasallan la sociedad. Asimismo, se basa también en la protección a la mujer, quien históricamente ha sido considerada inferior al varón, lo que se ha derivado en relaciones asimétricas de poder del varón respecto a la mujer, en donde aquel dispone de la vida de la mujer, por lo que en el hombre existe ya un prejuicio alimentado por la sociedad, la cultura e incluso el Estado respecto a que la mujer no es igual al varón.

Ahora bien dichas cuestiones o fundamentos de política criminal por los cuales se ha criminalizado esta clase de comportamientos por parte del legislador se traducen en sanciones penales, como medidas de mayor gravosidad que el Estado puede emplear en la protección de bienes penalmente relevantes, sobre todo si hacemos alusión a las penas privativas de libertad, que implican, como su nombre lo dice, la privación de la libertad ambulatoria de una persona y su reclusión en un centro penitenciario a fin de que se logre la resocialización y rehabilitación del condenado, bajo el ideal que, una vez puesto en libertad, no volverá a cometer dichas conductas disvaliosas. No obstante, el juez, quien es el operador jurídico que finalmente aplica la norma en un caso concreto, donde se busca la verdad acerca de la responsabilidad de una persona por la comisión de un delito, al momento de ejercer su potestad de deliberación, no solo debe tomar en cuenta lo que la norma penal expresa a rajatabla, esto es debe verificar si el supuesto de hecho verdaderamente se corresponde con la consecuencia jurídica prevista, para lo cual acudirá a determinados parámetros como la dignidad del condenado, la víctima y la convivencia social, interpretando los principios y garantías fundamentales que la Carta Magna y el Código Penal y Procesal Penal otorgan, como lo son el Principio de Proporcionalidad, de Lesividad, de Humanidad, de Merecimiento de Pena, asimismo, tendrá en cuenta los fines de la pena, esto es de resocialización y rehabilitación del condenado, acudiendo para ella a otras penas alternativas, mediante la conversión de pena o la suspensión de la pena, dependiendo del caso concreto.

En ese sentido arribamos a la conclusión, que a su vez se ha propuesto como hipótesis, de que si los fundamentos de política criminal advertidos el tipo penal en comento tienen en cuenta la dignidad del condenado, la víctima y la convivencia social, entonces se cumple la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, esto es la búsqueda de la rehabilitación y resocialización del condenado, para que, una vez cumplida

la pena impuesta, no vuelva a cometer algún acto criminal, en este caso agredir a una fémina por serlo o a los miembros del grupo familiar del cual forma parte, logrando a su vez la disminución en la incidencia de esta clase de fenómenos criminales.

Respecto al primer objetivo específico, consistente en **explicar los fundamentos que caracterizan la política criminal del Estado que sanciona las conductas criminales para el caso del tipo penal estudiado**, tenemos, de los antecedentes y bases teóricos plasmados y desarrollados en el presente trabajo de investigación, tenemos Corcoy (2010), tesista chileno cuyo objeto materia de estudio consistió en examinar en que grado las modificaciones normativas que se llevaron a cabo en su país en la última década a logrado resolver la problemática de la violencia contra la mujer y la intrafamiliar, respecto de lo cual, considera que a nivel social se vive una concientización, asimismo también respecto a las entidades persecutoras de esta clase de delitos. Asimismo, se aprecia que se han implementado medida de educación, tratamiento psicológico, e incluso amparo pecuniario a quienes resulten agraviados con este tipo de agresiones, con el fin de influir significativamente en la disminución de esta lacra social. Por otro lado, en forma crítica pone de relieve que de la actual regulación también se advierte la existencia de excesos y déficits punitivos, siendo que los primeros consisten por ejemplo **en la desproporción entre la pena prevista e impuesta y el desvalor del hecho**, imputaciones falsas motivadas por despecho, venganza, etc. por parte de las supuestas agraviadas, aplicaciones poco razonables de medidas de protección, prisiones preventivas antojadizas. Por otro lado, también se evidencian déficits punitivos que surgen de las calificaciones "benevolentes" de circunstancias que se enmarcan en delitos de homicidio, lesiones o violaciones, aun cuando sea en grado de tentativa, como delitos de "violencia de género o doméstica".

En esencia el autor realiza una apreciación crítica de los fundamentos político criminales existentes en su país respecto a la normativa relativa a los casos penales de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, señalando que existen excesos y déficits, tal como se ha detallado líneas arriba, siendo que la realidad de su país no dista mucho de la experiencia peruana con el enfoque de género pues también se aprecia la incidencia de dicha problemática en los casos conocidos por la judicatura, esto es denuncias falsas, desproporcionalidad de la sanción, etc.

Por otro lado, autores como Castillo (2019) refieren que primordial la actuación de la fuerza punitiva del Estado contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar, al persistir, pese a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, una situación de discriminación, fragilidad frente a la represión y uno de las herramientas indispensables es la positivización como delito de estos fenómenos, ello con la consigna de actuar para prevenir su comisión, por lo tanto los fundamentos de política criminal, orientado por el enfoque de género se justifican para proteger una forma violencia que hace unos cuantos años estaba normalizada por la sociedad.

Es por ello, que, pese a que el injusto penal en comento, en principio debería constituir una falta por no implicar más de diez días de incapacidad médico legal o afectación psicológica que no califique como daño psíquico, no obstante porque político – criminalmente se ha decidió aplicar el enfoque de género exigido por la Convención de Belem do Pará y elevar a la categoría de delito este tipo de conductas ilícitas, a fin también de brindar un mensaje coercitivo a la sociedad, a efectos que se abstengan de perpetrar estos comportamientos penalmente reprochables.

En ese sentido se ha logrado satisfacer este objetivo, pues se han explicado los fundamentos de política criminal que justifican la concreción como delito de la violencia

familiar y contra la mujer, en la modalidad establecida en el artículo 122-B del Código Penal.

Respecto al segundo objetivo específico consistente en **establecer los supuestos teóricos y normativos de las sanciones punitivas impuestas por el juez penal**, entiéndase, en los supuestos que configuren el artículo 122-B del Código Penal, ello fluye del análisis del casos, correspondiente al distrito judicial de Lambayeque en los años 2019 a 2021, en donde se han recabado treinta sentencias de condena por el referido delito, del cual se ha podido extraer diversa información relativa al objetivo encomendado, es así que de las decisiones judiciales analizadas se verifica que los jueces utilizan como supuestos teóricos, la doctrina relativa al enfoque de género, a la discriminación de la mujer por su condición de tal y derivada de relaciones asimétricas, asimismo acuden también a los principios del Derecho Penal, como la proporcionalidad de las penas, el principio de humanidad, de lesividad, de razonabilidad, acuden también a los fundamentos teóricos de los fines de la pena, procedente de la teoría de la pena. Por otro lado, como supuestos normativos acuden al Código Penal tanto a la parte general como especial, aplican las figuras de conversión de penal, de suspensión de la condicionalidad de la pena, teoría de la prueba, aplicación de acuerdos plenarios de carácter penal y procesal penal, acuden a la figura procesal de la conclusión anticipada del juicio realizando el control de legalidad de esta. Por tanto, se ha satisfecho el objetivo propuesto al identificarse los supuestos teóricos y normativos utilizados en la judicatura par aplicar sanciones punitivas en este tipo de casos.

En cuanto al tercer objetivo específico, consistente en **evaluar el contexto en el que se sancionó como ilícito el contenido del artículo 122- B del Código Penal**, del análisis de los antecedentes y de las bases teóricas, se verifica que la criminalización de esta conducta se dio en el marco de una concientización respecto al enfoque de género, en la

que el Estado se vio inmiscuido en razón a los lineamientos establecidos por el derecho internacional público, así tenemos la Convención de Belém do Pará en Brasil del año 1994, que establecía los parámetros que los Estados parte deben adoptar y adaptar en sus respectivos ordenamientos jurídicos para la lucha y erradicación de la violencia cometida contra las mujeres por su condición de tal, siendo en el 2015 que se emite la Ley N° 30364, con el cual se eleva a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar como una conducta criminal, ofreciendo definiciones, alcances y principios que se deben tener en cuenta al momento de emitir una decisión. Asimismo, se evidencia que en el tipo penal en estudio se configuran dos circunstancias una relativa a la violencia contra la mujer y la otra a la violencia cometida contra integrantes del grupo familiar, por tanto se verifican dos enfoques atendiendo a la vulnerabilidad de quienes pueden ser considerados como sujetos pasivos o agraviados, por tanto el mencionado objetivo específico ha sido cumplido satisfactoriamente.

Finalmente, en lo que se refiere al cuarto objetivo específico, consistente en **analizar casos judiciales penales correspondientes a los años 2019-2021, para establecer relación entre política criminal y la aplicación de una sanción penal**, se recabaron treinta sentencias de condena por el referido delito, es así que de las decisiones judiciales analizadas se verifica que de los treinta casos solo en tres de ellos la causa llegó a etapa de juzgamiento, mientras que en los veintisiete casos restantes, los acusados se sometieron a la conclusión anticipada del juicio, lo que implica que estos aceptaron los cargos formulados por fiscalía, estuvieron conformes con la pena a imponerse y aceptaron el pago de una reparación civil a favor de los agraviados. Ello implica que no se sometió a debate probatorio las pruebas ofrecidas por fiscalía ni fueron actuadas, bastando que el juez se limite solo a realizar en control de legalidad del acuerdo procediendo a emitir la sentencia condenatoria.

Asimismo, del análisis de las sentencias se puede advertir que en ninguna de estas se hizo efectiva la pena privativa de libertad, siendo que el juez aplicó la figura de la conversión de pena y en dos de los casos analizados aplicó la suspensión de la ejecución de la pena, pese a que se encuentra proscrito por la norma emplearla para el delito en análisis, en todo caso lo que debieron hacer los juzgadores, es motivar los argumentos por los cuales se apartan de la norma y proceden a la suspensión de la pena. Con ello se verifica que para la aplicación de la sanción penal se ha tenido en cuenta la dignidad del condenado, la convivencia social, los fines de la pena, el Principio de Proporcionalidad de las penas, pese a que el legislador ha impuesto que las penas sean cumplidas en forma efectiva, por lo que se satisface el presente objetivo en el sentido que ha permitido validar la hipótesis propuesta en el presente trabajo de investigación.

CONCLUSIONES

- La relación entre los fundamentos de política criminal advertidos en el artículo 122-B del Código Penal y la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, a partir del análisis de los casos de los años 2019-2021 en los juzgados penales de Chiclayo analizados en el presente trabajo implica que si dichos fundamentos tienen en cuenta la dignidad del condenado, la víctima y la convivencia social, entonces se cumple la finalidad de la sanción punitiva impuesta por el órgano jurisdiccional, esto es la búsqueda de la rehabilitación y resocialización del condenado, para que, una vez cumplida la pena impuesta, no vuelva a cometer algún acto criminal, en este caso agredir a una mujer por su condición de tal o a los miembros del grupo familiar del cual forma parte, logrando a su vez la disminución en la incidencia de esta clase de fenómenos criminales.
- Pese a que el delito establecido en el artículo 122-B del C.P., en principio debería constituir una falta por no implicar más de diez días de incapacidad médico legal o afectación psicológica que no califique como daño psíquico, no obstante, por cuestiones de política – criminal se ha decidido aplicar el enfoque de género requerido por la Convención de Belem do Pará a los Estados parte de la OEA, como es el caso de Perú y elevar a la categoría de delito este tipo de conductas ilícitas, a fin también de brindar un mensaje coercitivo a la sociedad, a efectos que se abstengan de perpetrar estos comportamientos penalmente reprochables.
- Se ha verificado que los jueces utilizan como supuestos teóricos, la doctrina relativa al enfoque de género, a la discriminación de la mujer por su condición de tal y derivada de relaciones asimétricas, asimismo acuden también a los principios del Derecho Penal, como la proporcionalidad de las penas, el principio de humanidad, de lesividad, de

razonabilidad, acuden también a los fundamentos teóricos de los fines de la pena, procedente de la teoría de la pena. Por otro lado, como supuestos normativos acuden al Código Penal tanto a la parte general como especial, aplican las figuras de conversión de penal, de suspensión de la condicionalidad de la pena, teoría de la prueba, aplicación de acuerdos plenarios de carácter penal y procesal penal, acuden a la figura procesal de la conclusión anticipada del juicio realizando el control de legalidad de esta.

- La criminalización de esta conducta se dio en el marco de una concientización respecto al enfoque de género, en la que el Estado se vio inmiscuido en razón a los lineamientos establecidos por el derecho internacional público, así tenemos la Convención de Belém do Pará en Brasil del año 1994, que establecía los parámetros que los Estados parte deben adoptar y adaptar en sus respectivos ordenamientos jurídicos para la lucha y erradicación de la violencia cometida contra las mujeres por su condición de tal, siendo en el 2015 que se emite la Ley N° 30364, con el cual se eleva a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar como una conducta criminal, ofreciendo definiciones, alcances y principios que se deben tener en cuenta al momento de emitir una decisión
- Se han analizado treinta sentencias en materia penal penales correspondientes a los años 2019-2021, para establecer relación entre política criminal y la sanción penal aplicable al delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, estableciéndose que en la mayoría de casos la causa terminó mediante una conclusión anticipada del juicio, en ningún caso se aplicó la pena privativa de libertad efectiva, sino que fundamentando sus razones en criterios de proporcionalidad, lesividad, de humanidad de las penas así como en cuestiones relacionadas a los fines de la pena (resocialización, reinserción y rehabilitación del penado para funcionar en la sociedad) convirtió la pena

en prestación de servicios a la comunidad y en la minoría de casos aplicó la suspensión de la ejecución de la pena, pese a estar proscrito por ley.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que dentro de las políticas públicas adoptadas por el Estado para la lucha contra la violencia ocasionada a la mujer por su condición de tal y a los integrantes del grupo familiar, además de las cuestiones de política criminal, materializado en la criminalización de conductas, el aumento de penas, la proscripción de beneficios o de la utilización del Derecho Penal Premial, se atienda el problema desde otras aristas que puede coadyuvar a la prevención de este tipo de fenómeno criminal, mejoras en el nivel educativo respecto a la igualdad entre varones y mujeres, hacer hincapié en el aprendizaje en la inteligencia emocional y la responsabilidad afectiva, mayor preocupación en el ámbito de la salud mental, mediante la contratación de más personal profesional como psicólogos, terapeutas, psiquiatras no solo en los nosocomios o centros de salud, sino en instituciones que se encargan de conocer casos de violencia contra mujer, como los centros de emergencia mujer, Ministerio Público (unidad de víctimas y testigos), Poder Judicial, etc.
- Se deben implementar el sistema de asistencia social, -como en el caso de otros países- mediante el cual se pueda monitorear el cumplimiento de las medidas de protección impuestas a favor de los agraviados, las órdenes de alejamiento el cumplimiento del tratamiento terapéutico, y de otro lado hacer seguimiento de la situación de los agraviados, verificando si se encuentran en situación de peligro o indefensión o si su salud mental está siendo controlada a través de terapias o tratamientos psiquiátricos, de ser el caso.
- Se debe mejorar el servicio gratuito de albergues temporales para mujeres o integrantes del grupo familiar que necesite mantenerse alejado del hogar

conyugal o familiar, para lo cual se debe disponer de presupuesto extraído de las arcas del Estado o mediante el apoyo de organismos internacionales y ONGs.

- Se debe tener en cuenta -a efectos de aplicar la sanción penal en un caso tipificado en el artículo 122-B del C.P.B- y de ser necesario imponer una pena efectiva, de cara al principio de proporcionalidad, la menor o mayor lesividad de la conducta reprochable, valiéndose de circunstancias objetivas como la persistencia o conducta reiterativa acreditada de hechos de agresión en un tiempo determinado desde que se gesta la unión familiar o la relación con la mujer hasta la denuncia, el nivel de vulnerabilidad de la víctima, la intencionalidad de la persona agraviada en mérito a lo que las pruebas permitan revelar, a fin de que no se cometan excesos ni queden impunes actos que si calificarían como agresión de género o intrafamiliar.

Referencias bibliográficas:

- Ayvar, C. (2007). *Violencia Familiar Interés de todos. Doctrina, jurisprudencia y legislación*. Arequipa: Adrus.
- Carcedo, A., & Monserrat, S. (2000). *Feminicidio en Costa Rica 1990-1999*. San José - Costa Rica: OPS.
- Castillo, J. (2019). *La prueba en el delito de Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar*. Lima: Editores del centro.
- Corcoy, M. (setiembre de 2010). *Problemática jurídico-penal y político-criminal de la regulación de la violencia de género y doméstica*.
doi:<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512010000100009>
- Del Águila, J. (2019). *Violencia Familiar. Análisis y Comentarios a la Ley N° 30364 y su Reglamento D.S. N° 009-2016-mimp*. Lima: Ubillex.
- Díaz, I., Rodríguez, J., & Valega, C. (2019). *Feminicidio, Interpretación de un delito de violencia basada en género*. Lima: PUCP.
- Echeburúa, E., & Redondo, S. (2010). *¿Por qué víctimas es femenino y agresor masculino? La violencia contra la pareja y las agresiones sexuales*. Madrid: Psicología Pirámide.
- Huaroma, A. (Lima). *Estudio del Feminicidio en el Perú y el Derecho Comparado*. 2018: AC Ediciones.
- Jescheck, H. (1987). *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. (J. Manzanares, Trad.) Granada: Comares.
- Monereo, J., & Triguero, L. (2009). *La víctima de violencia de género y su modelo de protección social*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Olsen, F. (1990). El sexo del Derecho. En D. Kairys, *The politics of law* (M. Santoro, & C. Courtis, Trads., págs. 452-467). New York.
- Ragúz, M. (2015). *Sexo, sexualidad, género e identidad*. Lima: PUCP.
- Reátegui, J. (2017). *El delito de Parricidio y de Feminicidio en el Código Penal*. Lima: Iustitia.
- Reátegui, R. (2019). *Feminicidio, Análisis Crítico desde la doctrina y jurisprudencia*. Lima: Iustitia.
- Ruiz, P. (2008). *Una aproximación al concepto de género*. Lima: Idea.
- Silva, J. (2000). *Estudios de Derecho Penal*. Lima: Grijley.
- Toledo, P. (2009). *Feminicidio*. México: Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
- Valega, C. (2015). *¿Avanzamos contra la indiferencia?: Comentarios a la nueva Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar*. doi:<https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/11/Art%C3%ADculo-VcM1.pdf>
- Villavicencio, F. (2010). *Derecho Penal Parte General*. Lima: Edit. Grijley. Lima: Grijley.

ANEXO 01

CONSTANCIA DE VERIFICACION DE ORIGINALIDAD

Yo, **FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO**, usuario revisor del documento titulado: **"FUNDAMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL ADVERTIDOS EN EL ARTÍCULO 122-B DEL CÓDIGO PENAL Y LA FINALIDAD DE LA SANCIÓN PUNITIVA IMPUESTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, A PARTIR DE CASOS DEL AÑO 2019-2021 EN LOS JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO"** Cuya autora es, **CLARA DENISSE TORRES CAMPOS**, identificada con documento de identidad 42129327; declaro que la evaluación realizada por el Programa Informático, ha arrojado un porcentaje de similitud de 18%, verificable en el Resumen de Reporte automatizado de similitudes que se acompaña.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y que el documento cumple con la integridad científica y con las normas para el uso de citas y referencias establecidas en los protocolos respectivos.

Se cumple con adjuntar el Recibo Digital a efectos de la trazabilidad respectiva del proceso.

Lambayeque, 08 de Junio del 20 23

FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO

DNI: 17450122

ASESOR

(Precisar si es docente, asesor, docente investigador, administrativo u otro)

Se adjunta:

*Resumen del Reporte automatizado de similitudes

* Recibo Digital

FUNDAMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL ADVERTIDOS EN EL ARTÍCULO 122-B DEL CÓDIGO PENAL Y LA FINALIDAD DE LA SANCIÓN PUNITIVA IMPUESTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, A PARTIR DE CASOS DEL AÑO 2019-2021 EN LO

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

7%

2

[Submitted to Universidad Andina del Cusco](#)

Trabajo del estudiante

1%

3

repositorio.unprg.edu.pe:8080

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.unheval.edu.pe

Fuente de Internet

1%

5

repositorio.uct.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

dspace.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

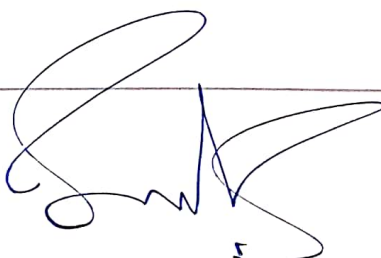
1%

7

[Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo](#)

Trabajo del estudiante

1%



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

083

Siendo las 000 horas del día 12 de Febrero del año Dos Mil
Veintidós, en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la
 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado,
 designados mediante Resolución N° 133-2022-EPG de fecha 8 Febrero 2022, conformado por:

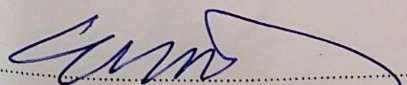
Dr. LUIS ARMANDO HOYOS VASQUEZ PRESIDENTE (A)
 Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO SECRETARIO (A)
 Dr. RAMOS MANAY VIALTER JAIME VOCAL
 Dr. FREDY WIDMAR HERNANDEZ DENIGRO ASESOR (A)

Con la finalidad de evaluar la tesis titulada "FUNDAMENTOS DE POLITICA
 CRIMINAL DEL ARTICULO 122-B DEL CODIGO
 PENAL Y FINALIDAD DE LA PENA IMPUESTA
 POR JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO
 EN EL AÑO 2019"
 presentado por el (la) Tesisista CLARA DENISSE TORRES CAMPOS
 sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 022-2024-I-EPG de fecha 26
DE ENERO DE 2024

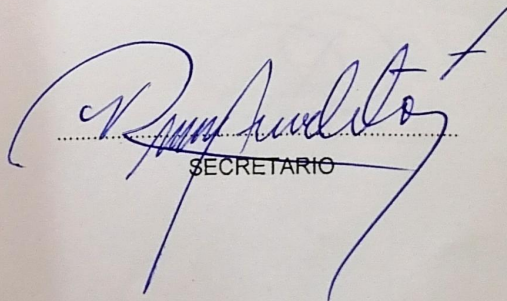
El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores
 miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que
 fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 18 puntos que equivale al
 calificativo de MUY BUENO

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de:
DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA

Siendo las 11:20 horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la
 presente acta.



PRESIDENTE



SECRETARIO

VOCAL

ASESOR



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Clara Denisse Torres Campos
Título del ejercicio: Maestrías y Doctorados
Título de la entrega: FUNDAMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL ADVERTIDOS EN EL A...
Nombre del archivo: Clara_Denisse_Torres_Campos._Tesis.docx
Tamaño del archivo: 293.17K
Total páginas: 118
Total de palabras: 24,201
Total de caracteres: 125,225
Fecha de entrega: 05-jun.-2023 10:13p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2109979226

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA
POLÍTICA



TESIS

"FUNDAMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL ADVERTIDOS EN EL
ARTÍCULO 122-B DEL CÓDIGO PENAL Y LA FINALIDAD DE LA
SANCIÓN PUNITIVA IMPUESTA POR EL ÓRGANO
JURISDICCIONAL, A PARTIR DE CASOS DEL AÑO 2019-2021 EN
LOS JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO"

Investigador(a): Dra. CLARA DENISSE TORRES
CAMPOS

Asesor: Dr. FREDY HERNÁNDEZ RENGIFO

Lambayeque, 2023

FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO

DNI: 17450122

ASESOR